



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CAMARA

(Artículo 36, Ley 5a. de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - IVSTITIA ET LITTERAE

AÑO IV - Nº 61

Santafé de Bogotá, D. C., martes 25 de abril de 1995

EDICION DE 32 PAGINAS

DIRECTORES: PEDRO PUMAREJO VEGA
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

DIEGO VIVAS TAFUR
SECRETARIO GENERAL DE LA CAMARA

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PUBLICO

CAMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE

a los Proyectos de ley números 119-93 Cámara y 163-93 Cámara acumulados: *“por la cual se modifica el Código de Comercio, respecto al Régimen General de Sociedades, Revisoría Fiscal y Procesos Concursales”*.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El proyecto 119-93- CAMARA fue presentado por el Gobierno Nacional a través de los Ministros de Desarrollo Económico, de Justicia y del Derecho y de Hacienda y Crédito Público y para su elaboración se contó no sólo con el trabajo decidido del Gobierno Nacional, sino también con el de un grupo de expertos en derecho comercial, así como con los aportes de algunas entidades gremiales y educativas.

El proyecto 163/93/Cámara fue presentado por el Honorable Parlamentario Armando Estrada Villa.

La propuesta contenida en el proyecto, busca modificar básicamente el Código de Comercio, en lo que a los regímenes mencionados se refiere, por lo cual, la aprobación que habrá de impartir el Congreso de la República al señalado proyecto, conllevará por parte del mismo el ejercicio de una de las facultades que de manera privativa y exclusiva le asignó la Constitución Política de 1991, cual es la de expedir códigos, la que tradicionalmente, por la vía de las facultades extraordinarias, le había correspondido al Gobierno, como precisamente sucedió con el actual código de comercio, expedido en virtud del Decreto 410 de 1971 a instancia de las facultades otorgadas en la Ley 16 de 1968 o como aconteció con el Decreto 350 de 1989 contentivo del actual régimen de los concordatos preventivos, expedido con base en las facultades señaladas en la Ley 51 de 1988. Por lo

tanto, resulta de suma importancia el trámite que ha de cumplirse con el citado proyecto, como quiera que en razón del mismo podrá directamente el Congreso de la República legislar sobre una materia no menos trascendente como lo es la relativa a la actividad empresarial colombiana.

Por otra parte, el proyecto presentado, comprende básicamente tres grandes temas a saber: el primero referente al régimen de sociedades, que abarca por lo tanto todas las materias legales atinentes a la formación, funcionamiento y extinción de las sociedades comerciales; el segundo, referente a la regulación propia de la revisoría fiscal y por último, el atinente a los procesos concursales.

Respecto al primero de ellos, la propuesta es la del establecimiento de un nuevo régimen de sociedades para lo cual, de una parte se acoge en los mismos términos como están consagrados hoy en día, muchos de los preceptos contenidos en el Libro Segundo del Código de Comercio y de la otra, se regulan nuevas figuras o instrumentos jurídicos y se efectúan algunas modificaciones de carácter sustancial.

Con relación al segundo tema, se busca consagrar un estatuto de revisoría fiscal que sería aplicable a cualquier persona jurídica que deba tener este órgano de fiscalización y por lo tanto, no se presenta como un tema exclusivo de las sociedades mercantiles.

Finalmente y en lo que corresponde al de los procesos concursales, se busca básicamente la unificación de este régimen, amén de la consagración de dos modalidades concursales, claramente diferenciables entre sí, como son la del concordato y la de la liquidación obligatoria.

Este proyecto, en la forma ya señalada, fue aprobado por la Honorable Comisión Tercera Constitucional permanente de la Cámara de Representantes, en su sesión del 6 de julio de 1994.

ANALISIS DEL PROYECTO

Habiéndonos correspondido el encargo de presentar ponencia de dicho proyecto para su debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, hemos procedido al análisis del mismo, para lo cual se ha tomado en cuenta que el objetivo al expedir una nueva regulación en cualquier materia, particularmente cuando de actividades de los ciudadanos se trata, como es la relacionada con la actividad empresarial, debe obedecer realmente a un criterio innovador mediante la incorporación a nuestro derecho positivo de nuevos instrumentos o figuras jurídicas o la modificación sustancial de los existentes, pues no se puede caer en el error de expedir nuevas leyes con el fin simplemente de reiterar preceptos ya operantes en nuestro medio o reformar aspectos meramente formales de las regulaciones existentes, pues ello llevaría sencillamente a la proliferación de leyes, lo que a su vez originaría inseguridades para las personas que deben sujetarse a las mismas. Entendemos y compartimos la idea de que las normas hay que modificarlas cuando los supuestos fácticos lo hagan necesario, es decir, cuando las circunstancias reinantes en un espacio o momento dado, lo hagan indispensable.

En el caso del proyecto que fue objeto de nuestro análisis, encontramos que el mismo contiene 601 artículos distribuidos así: 433 destinados al régimen de sociedades, incluido en él, el de la revisoría fiscal y 152 que corresponden al régimen de los procesos concursales, amén de los 16 artículos últimos, dedicados a lo que más

bien podría denominarse de las disposiciones finales.

Acorde con el pensamiento expuesto, nos dimos a la tarea de revisar en primer término el proyecto comentado, particularmente en lo que al régimen de sociedades se refiere, encontrándonos que casi la mitad de los artículos que lo conforman corresponden a disposiciones del actual Libro II del Código de Comercio, las cuales fueron incorporadas casi que textualmente al proyecto. Es decir, son algo más de 200 artículos que recogen íntegramente disposiciones actualmente vigentes, como ocurre por ejemplo con los capítulos dedicados a las sociedades colectivas y a las en comandita y que por lo tanto, en el proyecto no sólo mantienen la misma estructura, hoy entendida y asimilada por los colombianos, sino también su contenido y detalle.

Del Código de Comercio expedido en 1971, se ha dicho mucho, habiéndosele reconocido hoy por hoy su adaptabilidad a los nuevos fenómenos fácticos que se han dado con posterioridad a su expedición y su posibilidad de gobernar las situaciones jurídicas que puedan darse en el mundo mercantil. Si bien, no pueden desconocerse algunas inconsistencias que su texto presenta, no por ello puede negársele su profundidad y contenido. Como bien lo anotó el profesor Robert Chaler Means al referirse a nuestro estatuto comercial: "Puede, entonces, inferirse que cualquier legislación tan extensa y complicada como el código de 1972, contiene defectos técnicos, pero ellos se reflejan únicamente en detalles específicos, que no demuestran limitaciones significativas en un desarrollo legislativo nacional".

Si se revisa con detenimiento el Libro Segundo del Código de Comercio que regula lo referente a las sociedades comerciales y el cual se pretende derogar en su totalidad en el proyecto en estudio, puede concluirse que en su mayor parte es ese un estatuto armónico y coherente sobre la materia, que mantiene su capacidad para resolver con suficientes herramientas los asuntos propios de la actividad societaria. No puede decirse aún que los preceptos allí contenidos hubieren quedado a la zaga de los tiempos actuales, sino que mantienen plenamente su vigencia.

No nos apartamos de la consideración de que dicho estatuto requiere algunos ajustes con el fin de ponerlo a tono con tales tiempos y que además de ello sea conveniente incorporar a nuestra normatividad societaria instrumentos que permiten nuevas formas de participación en la actividad mercantil. Como se dice en la exposición de motivos que se anexó al proyecto, "el régimen de sociedades que forma parte del Código de Comercio de 1971, constituye un conjunto normativo bastante bueno y que ha sido de gran utilidad para el país durante los 22 años de su vigencia, pero sin duda requiere un ajuste que le permita cumplir en mejor forma la regulación de las relaciones de las sociedades tanto en el ámbito interno como en el externo". Entonces, si el actual régimen es en su mayor parte apto para continuar regulando las materias

de las que se ocupa, para qué la expedición de un nuevo texto normativo sobre el particular? ¿Para qué seguir inundando nuestro medio de leyes que aún no se justifican?

Por su parte, participamos de la opinión que la reforma que se viene impulsando a través del proyecto de ley al que se refiere este informe ponencia, debe consultar una orientación que le permita identificar un norte claro. En punto al régimen societario, la ley que se proyecta debe ocuparse principalmente de consagrar y regular aquellas nuevas figuras que hoy son ajenas a dicho régimen y que se consideran útiles para que los empresarios puedan desarrollar su actividad de mejor manera o que les permita nuevas alternativas de inversión.

Así también, debe aprovecharse esta ocasión para hacer aquellos ajustes necesarios que las nuevas realidades societarias demandan y que permitan adecuar al momento actual la estructura normativa de las sociedades, en orden a que el empresario colombiano encuentre el ropaje jurídico apropiado que le facilite el desarrollo de su actividad de una manera más apta para enfrentar los actuales retos económicos. En otros términos, además de la incorporación de aquellos temas novedosos realmente necesarios, es preciso también actualizar el régimen de sociedades ya vigente, pero no mediante la adopción de un nuevo texto legal, sino solamente mediante aquellas precisas modificaciones que sean indispensables.

TEMAS QUE SE EXCLUYEN

Bajo estas consideraciones, pasamos a ocuparnos enseguida de aquellos aspectos que en nuestro sentir, no deben mantenerse en el proyecto así como los fundamentos de tales conclusiones, en lo que al régimen de sociedades se refiere.

1. DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

1. 1. Un primer asunto es el referente a la determinación del momento a partir del cual la sociedad adquiriría la condición de persona jurídica. En el proyecto se prevé en varias disposiciones, entre ellas en la primera parte del artículo 20. y en el artículo 32, que aquél lo sea el de la inscripción en el registro mercantil, lo cual se justificaría en un régimen donde la figura de la inscripción tuviere un carácter esencialmente constitutivo y no declarativo como lo tiene actualmente el sistema colombiano. Por ello debe mantenerse la adquisición de la personalidad jurídica con el simple otorgamiento de la escritura de constitución, que aunque no está expresamente señalado en la actual legislación, así ha sido entendido mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia, circunstancia que no ha ofrecido mayores dificultades en la práctica, por lo que no es imperativo entrar a modificar esta situación.

1. 2. En el artículo 20. del proyecto original, se prevé la posibilidad de que los socios, los administradores o los controlantes, entre otros, respondan solidariamente por las obligaciones sociales cuando quiera que la sociedad se utilice para defraudar la ley o los derechos de terceros.

Es esta una forma de allanamiento de la personalidad jurídica o lo que en el derecho norteamericano se ha conocido como el "Disregard" que como su nombre lo indica, implica hacer dejación de la persona jurídica para llegar directamente a los socios. La verdad es que tal figura no puede ser concebida tan de manera escueta como lo está en el proyecto, por las implicaciones que tal consecuencia conllevaría. De hecho, la dificultad que su aplicación ofrece en otras latitudes hace poco aconsejable instituir la en nuestro medio, en el cual es posible encontrar instrumentos jurídicos que pueden ser igualmente útiles para lograr la finalidad que con el allanamiento se conseguiría.

Algunas personas autorizadas en la materia, claramente lo han expuesto y han señalado, con suficiente razón, que por ejemplo, el abuso del derecho, teoría que se ha desarrollado con base en el principio que contiene el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, o incluso el de la nulidad del contrato de sociedad, son instrumentos aptos para ello, que frente a una situación real de defraudación podrían ser suficientes para lograr enmendar estos hechos anómalos.

Incorporar al régimen societario disposiciones que lleven a la desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad y por consiguiente a una responsabilidad directa de los socios, indudablemente podría generar un desestímulo a la inversión en sociedades, pues si lo que impulsa la creación de estas formas asociativas es precisamente el beneficio de la personalidad jurídica, ante la posibilidad de que éste no opere, con los consiguientes riesgos que ello conllevaría, no sería la sociedad un instrumento ideal de inversión o de ejercicio de la actividad mercantil. Si hoy en día se utiliza la sociedad como medio de defraudación por parte de sus fundadores o socios, existen conductos jurídicos a través de los cuales se puede llegar a esos defraudadores, de manera que la consagración específica de hipótesis que lleven a la inoperancia de la limitación de responsabilidad, no representa ningún avance y si un riesgo para el futuro de la sociedad mercantil colombiana.

1. 3. En cuanto a la constitución de la sociedad de la cual se ocupan los artículos 14 y 15 del proyecto, no se ve una razón que justifique la separación de las cláusulas del contrato que serían de obligatoria estipulación, de aquellas que serían simplemente adicionales, ya que la doctrina tiene suficientemente definido que si bien el artículo 110 del Código de Comercio señala que las menciones que en él se consagran, deben expresarse en los estatutos de la compañía, ya se ha concluido que aquellas que corresponden a materias contenidas en disposiciones supletivas bien pueden omitirse, por existir precisamente la norma legal que suple el silencio de los contratantes. Así por ejemplo, si nada se dice sobre las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, el artículo 152 de manera general prevé que deben hacerse por lo menos a fin de cada año calendario, disposición que se reitera en el caso de la sociedad anónima.

Así mismo se prevé la posibilidad en el artículo 15 señalado que la sociedad pueda tener duración indefinida, de lo cual tampoco se ve la utilidad práctica, pues al no existir la exigencia de que solo pueda pactarse el término de duración hasta determinados años, hay la posibilidad de que en los estatutos se puedan consagrar lapsos bastante amplios.

1. 4. En cuanto a las reglas previstas para la disminución de capital de las cuales se ocupa el artículo 56 del proyecto, consideramos que es pertinente mantener el esquema actual, esto es, que la misma sólo proceda previa autorización de la Superintendencia, ya que ello permite verificar con mayor seguridad los requisitos que hoy consagra el artículo 145 del Código de Comercio, que de por sí son suficiente garantía de que los capitales de las sociedades no puedan desintegrarse o reducirse en perjuicio de los intereses de terceros.

1. 5. En el artículo 92 del proyecto se incluye la adquisición, lo que aparentemente podría ser una figura nueva al señalarse que cuando una sociedad adquiera la totalidad de las cuotas o acciones de otra, pueda absorber a ésta, lo que si bien no está consagrado hoy en día, ello no significa que pueda darse, pues si bien la adquisición de todas las partes alcuotas de otra sociedad implicaría para ésta el quedar incurso en causal de disolución por reducción del número de socios, nada se opone que mientras no se declare la correspondiente disolución y no transcurran los seis (6) meses que otorga la ley para su enervamiento, puedan los interesados optar por la fusión.

1. 6. En punto al Capítulo VIII sobre los derechos y obligaciones de los socios, no se consagran disposiciones diferentes a las que hoy existen como se puede apreciar de una comparación entre el artículo 98 del proyecto contentivo de los derechos y el actual artículo 379 del señalado código, que de manera clara enumera los derechos que la acción confiere a su titular y los cuales se han entendido son los derechos mínimos que rigen para los asociados de cualquier sociedad mercantil.

1. 7. En lo que respecta a la exclusión de socios de que trata parte de la Sección II del Capítulo citado en el punto precedente, tampoco se encuentra razón valedera para su consagración de manera general como se pretende en el proyecto. El Código de Comercio vigente solo establece unas causales de exclusión para la sociedad colectiva y de contera, para los gestores de las sociedades en comandita, que básicamente es el mismo criterio que se conserva en el proyecto.

1. 8. Respecto del Máximo Órgano Social, regulado en los artículos 115 a 142 del proyecto, la verdad es que en su mayor parte solo persigue llevar a un régimen general reglas que hoy son propias de la sociedad anónima, pero no exclusivas de ellas, si se tiene en cuenta el reenvío que a estas reglas hacen los artículos 349 para la sociedad en comandita por acciones y 372 para la sociedad de responsabilidad limitada y en todo caso, el principio de la analogía que establece el artículo 1o. ibídem para la materia

mercantil. Además de una mejor presentación técnica de la normativa societaria, no se encuentra razón que haga urgente o al menos necesaria esa unidad formal, como es el caso del artículo 116, el cual pretende reunir en una sola disposición, las funciones que para la Asamblea o Junta de socios señalan los artículos 187, 358 y 420 del nombrado código o la consagración en esa parte de normas relativas a determinadas clases de reuniones, que igualmente hoy regula la legislación mercantil.

1. 9. A partir del artículo 172 y hasta el artículo 200, se acoge en el proyecto la materia atinente a la disolución de la sociedad y liquidación del patrimonio social. Mirada en su conjunto esta preceptiva, nos encontramos con que tampoco se hacen sustanciales reformas de manera que se justifique la expedición de un estatuto como el que se pretende con el proyecto. Así por ejemplo, en materia de causales de disolución el artículo 172 del proyecto consagra básicamente las mismas causales señaladas en el actual artículo 218 del Código de Comercio y como novedoso, sólo trae, además de la consagración para todas las sociedades de la causal por pérdidas, que actualmente está prevista de manera especial para las sociedades anónima y de responsabilidad limitada, la causal atinente al bloqueo o paralización de los órganos sociales, la cual, a nuestro modo de ver, no puede constituir por si misma motivo que pueda llevar a la disolución de una sociedad, ya que siendo los conflictos entre socios los que por lo general son causa de tal paralización, deben ser otras las alternativas para hacer frente a esta situación, preferiblemente aquellas que no conlleven una extinción de la sociedad.

Hoy en día es posible que tal circunstancia pueda originar una causal de disolución, lo que sucede es que no es en forma directa y única, como se prevé en el proyecto, sino que tendría que darse conjuntamente con otros factores como es el que en virtud de la paralización, la sociedad quede imposibilitada para desarrollar su objeto social, lo que haría incurrir a la respectiva sociedad en la causal del numeral 2o. del artículo 218 citado.

En punto a la liquidación, prácticamente se mantienen las mismas normas del actual código, siendo lo mas novedoso el mecanismo de traslado de inventario, no obstante lo cual, creemos que no basta con una simple modificación en tal punto, sino que dicho mecanismo debe consagrarse introduciendo simultáneamente otros aspectos y de todos modos, manteniendo el sistema de publicidad que consagra el artículo 232 del Código de Comercio y no eliminándolo, como está proyectado.

1. 10. Finalmente, de este título se excluyen otras normas, que como se dijo, no presentan ninguna modificación en relación con las actuales disposiciones del Código de Comercio, o las que se efectúan no tienen mayor profundidad. Tal ocurre con parte del Capítulo II sobre la sociedad de hecho, donde el único cambio que prohija es el de extender el concepto de esta forma asociativa para comprender en el mismo el caso de las sociedades constituidas por escri-

tura pública, concordante con lo que exponíamos en el punto 1. 1. Igual sucede con los Capítulos IV y V sobre aportes y utilidades sociales, el Capítulo VI sobre reformas estatutarias, los apartes del Capítulo VII dedicados a la transformación y a la fusión que conservan el mismo contenido del régimen actualmente vigente.

2. DE LA SOCIEDAD COLECTIVA

Como ya tuvimos oportunidad de adelantar-lo, en materia de sociedades colectivas el Título III del Proyecto, que regularía este tipo societario, no presenta prácticamente ninguna modificación en relación con la preceptiva actual. Tan sólo se precisa lo referente a la responsabilidad subsidiaria de los socios frente a las obligaciones sociales y el momento a partir del cual se adquiere la condición de socio.

3. DE LA SOCIEDAD EN COMANDITA

Al igual de lo que acontece con la sociedad colectiva, no contiene el proyecto prácticamente ninguna modificación al régimen actual, salvo en lo referente a la disminución del número de los comanditarios en el caso de la en comandita por acciones que se propone sea de dos, aspectos que no consideramos ameriten su inclusión dentro de la reforma.

4. DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

La sociedad de responsabilidad limitada, fue tal vez uno de los tipos societarios que en el proyecto original presentaba mayores modificaciones, entre las que se destacan la relativa a la posibilidad del pago del capital social de manera similar a como ocurre en la sociedad anónima, la eliminación del número máximo de socios o la flexibilización de los requisitos exigidos para la cesión de cuotas. No resulta difícil deducir que tales modificaciones apuntaban a un acercamiento de este tipo societario a la forma anónima, con el propósito de permitirle a la pequeña y mediana empresa un instrumento sustituto de la sociedad anónima.

No consideramos pertinente que el camino para hacer que la anónima se reserve a la gran empresa, para la cual dicho tipo societario constituye su natural medio de desenvolvimiento, sea el de distorsionar el molde propio de la limitada que le da a ésta una estructura en la que sobresalen algunas aristas propias de las sociedades de personas. La sociedad de responsabilidad limitada, en la forma como está regulada hoy en día, tiene la virtud de ser un mecanismo de asociación que brinda, en términos generales, la ventaja de la limitación de la responsabilidad para todos los socios, sin que se sacrifique el elemento personal en la relación entre socios o de estos con la sociedad, aspecto este último que se resquebrajaría con una reforma como la propuesta.

Siguiendo el criterio según el cual el objeto de la reforma al régimen de sociedades no debe ser el de alterar las estructuras de los distintos tipos societarios que consagra la actual legislación mercantil, no vemos adecuado mantener las modificaciones señaladas y más bien, optar

en su lugar por una vía diferente para lograr aquel propósito que busca reorientar la sociedad anónima hacia la gran empresa y especialmente, hacia el mercado de valores.

5. REVISORIA FISCAL

No consideramos pertinente mantener el régimen de revisoría fiscal que se tiene previsto en el proyecto. De una parte y atendiendo a un aspecto meramente formal no hay coincidencia entre el texto del proyecto que se propone y el señalado régimen ya que éste está concebido para aplicarse a la revisoría de cualquier persona jurídica mientras que aquél se refiere a sociedades básicamente. Consideramos que la revisoría fiscal y concretamente en lo referente al régimen que debe establecerse, merece una consideración aislada a cualquier otro proyecto y no refundirse con otros textos que puedan en el futuro originar confusión o inseguridad en cuanto al ámbito de aplicación, amén de que el que se incluye, y que fuera originalmente presentado en otro proyecto, merece un mayor y más detenido estudio.

6. CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIA

Bajo esta figura, se regulan en el proyecto de ley número 119 dos modalidades contractuales como son el contrato de agrupación, en virtud del cual dos o más empresarios se unen para desarrollar de una manera estable, determinada fase de su actividad económica, y el contrato de unión transitoria, por el cual, ya no de una forma permanente, dicha unión se da para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro. Ciertamente resulta novedoso dentro del contexto del proyecto un capítulo dedicado a este tema, pero dicha novedad no pasaría de ser meramente normativa, ya que en la práctica no puede negarse que estas formas contractuales ya vienen teniendo ocurrencia y de hecho la actividad mercantil se ha servido de las mismas para la realización de determinadas operaciones.

Pero la inquietud que surge es hasta qué punto resulta útil para la realidad de los negocios mercantiles una regulación amplia respecto de esta figura, cuando de todas formas la misma ha tenido desarrollo, amén de que los distintos ordenamientos legales son suficientes para gobernar los diferentes aspectos involucrados en una relación contractual de tal naturaleza. Más bien habría el temor de que una tipificación de los referidos contratos podría limitar las posibilidades de negociación entre los comerciantes ya que al sujetar su celebración al cumplimiento de una serie de formalidades y requisitos que estarían contenidos en un régimen detallado como el propuesto, se generaría una desmotivación hacia la utilización de estos mecanismos contractuales.

ASPECTOS QUE SE MANTIENEN

1. UNIFICACION DE LA LEGISLACION CIVIL Y COMERCIAL

Con base en la consideración de que el derecho mercantil, dada su extensión y los asuntos en él comprendidos, ha originado la dificultad

para establecer cuando una actividad es de naturaleza civil exclusivamente, se propuso en el proyecto la unificación de tales legislaciones, planteando simplemente que toda sociedad sería de naturaleza comercial. Compartimos la apreciación según la cual es necesario eliminar esa dualidad de regímenes, pero para ello no se hace menester unificar la naturaleza de estas sociedades, sino que igual propósito se logra previendo que para todos los efectos, todas las sociedades estén sujetas a la legislación comercial, lo que a nuestro modo de ver significará que todas ellas, que continuarán siendo civiles o mercantiles según la actividad principal que se prevea en su objeto social, serán objeto de la legislación mercantil y por lo tanto, estarán sujetas a las obligaciones que la misma impone a todas ellas.

2. ESCISION

La escisión, que permitirá el que una sociedad pueda dividir su patrimonio en dos o más partes, una de las cuales o todas serían destinadas a la creación de una o varias sociedades o a su absorción por otra u otras existentes, se mantiene, dada la obvia importancia que esta figura representa por la diversidad de operaciones que pueden realizarse a través de la misma, que permitiría desde un saneamiento de la situación de la sociedad hasta la adopción de nuevas estructuras organizativas de actividad empresarial. Así mismo se establece una regulación completa, haciéndose una remisión a las normas de la fusión para lo no previsto en aquélla.

3. DERECHO DE RECESO

Igualmente se mantiene el Derecho de Receso, aunque también con algunas modificaciones que hemos introducido especialmente en lo referente a los casos en que éste procede. Consideramos que en aras a la integridad del capital social de las compañías, que a su vez es prenda común de los acreedores, no puede convertirse prácticamente en regla general la posibilidad del retiro o receso que es a lo que el mantener esa posibilidad para los eventos de cambio de domicilio o modificación del objeto social, como está previsto en el proyecto. Por eso creemos que debe restringirse únicamente para los casos de transformación, fusión y escisión, siempre y cuando para los socios se originen cambios sustanciales como lo es el incremento de su responsabilidad o la disminución de su situación patrimonial. Así también será posible dicho receso cuando tratándose de sociedades con acciones inscritas en bolsa de valores, dicha inscripción se cancele.

4. ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS

En punto a la Asamblea o junta de socios se conserva lo que en el proyecto inicial se denomina las reuniones no presenciales y así como también el mecanismo que permite que por escrito todos los socios mediante la expresión de su voto, participen en la adopción de una o más decisiones sociales, instrumentos estos que contribuirán a facilitar el funcionamiento del máximo órgano social y permitir así el que se puedan adoptar decisiones con la celeridad y rapidez que la actividad mercantil requiere.

5. ADMINISTRADORES

La necesidad de abandonar los modelos tradicionales de responsabilidad referidos al buen padre de familia, que hoy resultan disueltos, para acoger como nuevo patrón el del correcto y leal empresario, ha llevado a proponer un acápite sobre administradores. Una mejor protección del crédito, del público, de los trabajadores y de los mismos socios hace indispensable detallar y precisar las funciones y responsabilidad de los administradores así como las consecuentes acciones de responsabilidad, puesto que es claro que tales funcionarios detentan hoy inmensos poderes y adoptan decisiones de profundas implicaciones sociales, que como es de esperar deben ceñirse a un estricto código de conducta, que resulta concordante con las normas de rendición de cuentas previstas en el capítulo de estados financieros.

De otro lado, el régimen propuesto representa un contrapeso al cambio del esquema en la inspección, vigilancia y control de las sociedades, los que conllevan menos intervencionismo estatal.

Confiamos que con estas nuevas disposiciones no sea difícil, como hasta ahora, establecer las responsabilidades de los administradores y lograr el reconocimiento de las respectivas indemnizaciones, con la seguridad que a los buenos administradores el régimen no les impone obligaciones distintas de las que ya tienen.

6. MATRICES Y SUBORDINADAS

En cuanto a la propuesta que tiene que ver con el régimen de las matrices y subordinadas, no estimamos prudente ampliar de manera notable la regulación sobre este tópico, pues consideramos que la realidad colombiana no tiene las condiciones necesarias que permitan un desenvolvimiento adecuado de los llamados grupos de sociedades frente a una normatividad como la sugerida, además de que algunos de los puntos específicos de la misma, conllevarían también a un desestímulo para procesos organizativos de las empresas, tal es el caso de lo que podría suceder con una disposición que cree una responsabilidad subsidiaria de la matriz por el estado de insolvencia de la sociedad controlada, cuando éste se produzca como consecuencia de las actuaciones de la controlante, o simplemente generarían consecuencias contradictorias, como sería aquella disposición que busca consagrar en favor de los socios no participantes en la situación de control, el derecho de transferir a la entidad controlante su participación en la controlada, ya que de una parte al obligar correlativamente a la controlante a adquirir dicha participación, se estaría vulnerando su autonomía y de la otra, se le facilitaría la consolidación de su participación y por ende, de su control.

Por ello, sólo se mantienen algunas modificaciones que persiguen básicamente que respecto a las situaciones de control exista una mayor información hacia los terceros e incluso hacia los socios no vinculados a la misma, a través del mecanismo de inscripción en el registro mercantil, dotándose a los organismos de

vigilancia de algunas facultades tendientes a hacer efectivo tal mecanismo. Así mismo se mantiene el concepto de grupo de sociedad, el cual también estará sujeto a las mismas formalidades de publicidad, pero se adiciona la referida regulación estableciendo el informe especial para que en el caso de la existencia de grupos, los administradores de las sociedades controladas deban informar a sus socios los aspectos más importantes que se den en un ejercicio social entre ella y la controlante.

7. ESTADOS FINANCIEROS

Analizando las tendencias del Derecho Societario en el contexto internacional, se observa que éste ha procurado facilitar la presencia de las sociedades en el mercado de valores. Este mercado exige importantes y confiables flujos de información, lo que ha llevado a destinar un capítulo para regular diversos aspectos acerca de los estados financieros. En este orden de ideas se consagra la obligatoriedad de presentar estados financieros consolidados, que es consecuencia obligada del régimen de matrices y grupos empresariales.

El régimen se ha concebido para que sea aplicado a todas las sociedades en la línea de evitar que únicamente las emisoras de valores se encuentren reguladas en esta materia, impidiendo así, que la información se constituya en una barrera para acceder al mercado de capitales.

Adicionalmente, las disposiciones en esta materia contribuyen a proteger el crédito, ya que facilitan a los acreedores el conocimiento de la situación financiera de las sociedades.

Con el ánimo de evitar un exceso de información nocivo, se propone que por norma reglamentaria se puedan instituir los estados financieros abreviados como existe en otros países y se puedan exceptuar ciertas compañías del régimen de depósitos y publicaciones de sus estados financieros.

8. SOCIEDADES ANONIMAS

Respecto a las sociedades anónimas, una modificación que se propone es la relativa a la reducción de la mayoría decisoria de la asamblea general de accionistas que implicará que en estas sociedades, las decisiones deban adoptarse en todos los casos, cuando menos, con la mayoría absoluta de las acciones representadas en la reunión, pero dejándose abierta la posibilidad de que en las sociedades que no negocien sus acciones en el mercado público de valores, puedan estipularse en los estatutos mayorías decisorias superiores para determinadas decisiones. Con ello se busca crear un espacio para los inversionistas, de tal manera que éstos no se vean precisados a recurrir a grandes inversiones para alcanzar el control decisorio.

De otra parte, se conserva la posibilidad de que la sociedad anónima pueda constituirse por suscripción pública, por cuanto su regulación contribuirá a una mayor utilización de este mecanismo, más aun cuando el mismo no estaría circunscrito únicamente para cuando haya oferta pública, sino también para cuando se

pretendan obtener los recursos proyectados, de pocos o contados inversionistas. También se mantiene la nueva regulación sobre acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, ya que realmente ésta, frente al régimen vigente, sí contribuye notablemente a flexibilizar los requisitos que son necesarios para poder emitir esta clase de acciones; sin embargo, se proponen algunas modificaciones a la propuesta inicial que persiguen que el nuevo régimen sólo se ocupe de algunos aspectos fundamentales.

9. EMPRESAS UNIPERSONALES

Con la empresa unipersonal se busca corregir aquella situación que se suele presentar y según la cual se utiliza inadecuadamente el expediente de la sociedad mercantil para la explotación de determinados negocios por parte de una sola persona, quien es realmente la dueña del negocio, utilizando a terceras personas que prestan sus nombres para configurar la pluralidad exigida como elemento fundamental para la formación de la sociedad. Ciertamente la utilidad de esta figura no tiene discusión. Sin embargo, su concepción debe ser diferente a la propuesta contenida en el proyecto original y consecuente con ello, se plantea el que la empresa unipersonal tenga personería jurídica y que su funcionamiento se asimile más a la sociedad mercantil.

10. INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL

Por último la inspección, vigilancia y control de las sociedades que ejerce la Superintendencia de Sociedades, sobre aquellas no vigiladas por otra Superintendencia, se conserva igualmente, pero bajo un esquema donde se definen y distinguen claramente cada uno de tales conceptos y se delimitan las facultades que dicha entidad puede ejercer en cada una de ellas.

La inspección permitirá que a cualquier sociedad pueda requerírsele información con miras a que la entidad pueda conocer en cualquier momento la situación jurídica, contable, financiera o administrativa de la misma, sin que las sociedades que se encuentren en este estadio tengan obligación alguna frente al mencionado organismo, distinta a la de remitirle la información cuando le sea solicitada. Por su parte la vigilancia implicará un seguimiento permanente, pero sin que en ese estado existan para la sociedad mayores obligaciones frente a la entidad de vigilancia y por último, el control, que sólo se ejercerá sobre aquellas sociedades que se encuentren en situación crítica, dotando a la entidad estatal de un mayor número de facultades, encaminadas a lograr la pronta recuperación de las empresas que se encuentren en tal situación.

Además, se le asignan otras facultades para ser ejercidas solamente cuando un determinado número de asociados o el revisor fiscal soliciten la adopción de las mismas, con lo cual se busca que los socios minoritarios cuenten con mecanismos rápidos y efectivos para los casos en que se den ciertas circunstancias que conlleven el desconocimiento o desmejoramiento de sus derechos.

De acuerdo con ello la inspección y vigilancia no implicará un intervencionismo del Estado, sino más bien un mecanismo de soporte y ayuda al sector empresarial.

PROCESOS CONCURSALES

En esta parte, se mantiene la misma estructura del proyecto que en punto a los procesos concursales persigue unificar los procedimientos a través de un trámite único que tenga por objeto un concordato o acuerdo de recuperación de la empresa, o la liquidación obligatoria.

En materia del concordato se hacen algunas precisiones en los términos que más adelante se indican, mientras que en lo que a la liquidación obligatoria se refiere, se suprimieron varias disposiciones del proyecto original (artículos 502, 509, 511, 513, 515, 516, 517, 518, 540, 562, 563 y 564), pero haciendo, en cuanto a los asuntos allí regulados, una remisión a las normas de los concordatos, por tratarse de hipótesis similares.

Los puntos que respecto a los concordatos ameritan alguna modificación, son los siguientes:

1. TRAMITE DE OFICIO

Esta disposición recoge con una mejor técnica, lo consagrado en los artículos 439, 440, 441 y 442 del proyecto.

Dada la importancia del proceso concursal en cualquiera de sus dos modalidades, se legitima a cualquier persona que demuestre interés jurídico para que denuncie la situación que da lugar a la apertura de aquél. Esta modificación hace más amplia la legitimación dando cabida por ejemplo a los socios, los cuales se encontraban excluidos en el proyecto inicial.

Es de destacar que se adiciona la disposición estableciendo un término de dos (2) meses dentro del cual el deudor deberá solicitar el proceso concursal, no como límite para establecer la caducidad de la petición como sucede actualmente con el artículo 40. del Decreto 350 de 1989, sino como hecho que da lugar a la posible remoción de los administradores de la deudora.

2. APERTURA DEL TRAMITE

Fundamentalmente se conserva la estructura de la disposición, presentando cambios que la hacen más operante, a saber:

En muchos casos se hace necesario la apertura del trámite, indefectiblemente, por lo cual se incluye un nuevo numeral relativo a cuando la situación de incumplimiento en el pago regular de las obligaciones por parte del deudor se haya extendido por seis o más meses, reconociendo la transcendencia del evento, no operando en consecuencia la posible adopción de planes de recuperación.

Así mismo se incluye un nuevo evento que ha sido tradicionalmente recogido por la legislación de otros países, referido a la apertura del trámite cuando la casa matriz haya sido admitida a concordato en el exterior.

3. REQUISITOS SUSTANCIALES

Este precepto presenta reformas particularmente importantes habida cuenta que la finalidad del concordato en últimas es la conservación de la empresa, por lo cual no resultaría coherente mantener el requisito relativo al cumplimiento de las obligaciones del registro mercantil y llevar la contabilidad de acuerdo con las disposiciones legales, pues ellas estarían sujetas al capricho o querer de los administradores.

Si bien tal información es importante para conocer la situación económica y financiera de la compañía, no lo es menos, que depender de ellos genera en muchos casos la imposibilidad de recuperar la empresa, abocándola a un trámite de carácter liquidatorio.

Igualmente se suprime el numeral 4o. relativo a la imposibilidad o inhabilidad para ejercer el comercio, en atención a la manera como está estructurado el proceso de liquidación obligatoria.

4. REQUISITOS FORMALES

Básicamente se conserva la estructura de la disposición presentando cambios en los numerales 3o., 4o., 5o. y 8o. fusionándolos en uno solo. Así mismo se armoniza esta regulación con la prevista por el Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993, por lo cual se refiere a un estado de inventario; el cual brinda mayor certeza respecto a la situación del deudor, toda vez que el mismo debe estar debidamente comprobado.

5. CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA DE APERTURA

Las variaciones que presenta esta disposición son las siguientes:

-En cuanto a la integración de la junta provisional de acreedores se incluyen dos nuevos renglones, los cuales operarán en el evento de que existan acreedores de dicha calidad, reconociendo la especial importancia y la multiplicidad de intereses que representan los tenedores de bonos, así como la sociedad administradora del patrimonio autónomo generado mediante la titularización de los activos del deudor.

-En cuanto a la comunicación a que alude el numeral 5o., se suprime la calificación de telegráfica, lo cual permite acceder a nuevos mecanismos de comunicación igualmente eficaces, atendiendo los cambios tecnológicos que puedan presentarse por ejemplo fax, correo electrónico etc. Así mismo y en consideración a particulares circunstancias, el juez del concordato puede ordenar al deudor la ejecución de las referidas comunicaciones.

6. CONTINUACION DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS EN DONDE EXISTEN OTROS DEMANDADOS

Habida cuenta de que las hipótesis contenidas en el proyecto inicial no son las únicas que dan lugar a que un tercero pueda pagar obligaciones del deudor, se incluye la expresión "cualquier otra persona que deba cumplir la obligación", dando cabida a figuras como el llamamiento en garantía.

7. OBLIGACIONES DIFERENTES AL PAGO DE SUMAS DE DINERO

Esta disposición presenta cambios sustanciales en consideración a que por las particulares condiciones del concordato, como mecanismo de recuperación de empresas y no como instrumento para la decisión de un litigio, hacía necesaria la modificación de la disposición en la forma contenida en el proyecto, pues ella permitía debatir perjuicios en el trámite del concordato, aspecto ajeno al mismo y de resorte exclusivo de la justicia ordinaria.

8. CANCELACION Y RESTABLECIMIENTO DE GRAVAMENES

Como quiera que en muchas ocasiones dentro del trámite del concordato se hace necesaria la enajenación de bienes de la deudora gravados con prenda o hipoteca en favor de uno o varios de los acreedores que concurren al trámite concordatario, no resulta en las condiciones previstas en la legislación actual factible dicha enajenación pues se hace necesario contar con la autorización del referido acreedor, la cual, como es obvio está condicionada al previo pago de la acreencia respaldada con la respectiva garantía. Tal práctica hace inoperante la finalidad del concordato y conduce en muchas ocasiones a la violación de los privilegios contenidos en la ley.

Si bien el Decreto 350 contiene en el artículo 45 una regla que facilita la enajenación de los bienes gravados con prenda o hipoteca, la misma no cubre el evento descrito, pues está condicionada a la celebración de un acuerdo concordatario, impidiendo que en el trámite y antes de tal etapa puedan enajenarse los bienes tal como atrás se anotó. Por ello, se incluye una nueva disposición que de paso se anota, respeta el privilegio y la preferencia del acreedor para el pago de su crédito.

9. FUNCIONES DEL CONTRALOR

Se rediseña la disposición, a fin de destacar el papel primordial del contralor en la evaluación de la fórmula de arreglo presentada por el deudor con la solicitud de concordato.

Así mismo, se aclaran las funciones contenidas en el proyecto, a fin de evitar los continuos enfrentamientos con los administradores de la sociedad deudora, indicando que en caso de existir causales que impongan la remoción de aquéllos deberá ponerlas en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades, a fin de que sea ella quien adopte las medidas del caso, no teniendo en ningún evento funciones de administración.

10. FUNCIONES DE LA JUNTA PROVISIONAL DE ACREEDORES

Al igual de lo que acontece con el contralor, la disposición se acondiciona a fin de destacar la importancia mayúscula de la junta como organismo encargado de estudiar la fórmula de acuerdo concordatario, ejerciendo a cabalidad su mandato como organismo representante de los acreedores.

Esta modificación reconoce la práctica relativa a que las fórmulas de acuerdo concordatario surgen de la junta provisional.

A fin de evitar los continuos enfrentamientos entre la junta provisional de acreedores y los órganos sociales de la deudora, se eliminan las funciones relativas a la administración que estaban en cabeza de la junta en el proyecto; lo cual no quiere decir que en desarrollo de su papel no pueda sugerir al deudor modificaciones concretas tendientes a superar su estado de crisis.

11. REMOCION DEL REVISOR FISCAL

Se incluye esta nueva disposición la cual permite un mejor control dentro del trámite del concordato, haciendo factible la remoción del revisor fiscal de manera oficiosa por la Superintendencia o a petición de la junta o del contralor, cuando se compruebe que no denunció oportunamente la situación de crisis del deudor cómo o cuándo no estando la empresa en marcha hubiere omitido exigir que así se revelara en los estados financieros, o se hubiere abstenido de solicitar la adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes del deudor o de los que tuviere en custodia o a cualquier otro título.

12. TERMINO PARA HACERSE PARTE

Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones el término con que cuentan los acreedores para hacerse parte en el trámite del concordato resulta estrecho, particularmente si se trata de proveedores del exterior, se amplía el término de 10 a 20 días.

Así mismo se incluye una nueva regulación en la disposición, a fin de dar cabida a los créditos condicionales, respecto de los cuales se notaba la ausencia de una disposición que los regulase, es por ello que se prevé que tales acreedores, así como los titulares de obligaciones sujetas a litigio, deberán hacerse parte dentro del trámite concordatario a fin de que se atiendan las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo, quedando sujetos a los términos previstos en el acuerdo concordatario. Se establece que los pagos únicamente se efectuarán cuando la respectiva obligación se haga exigible, como tal situación (la exigibilidad) puede demorarse, se prevé que con los dineros correspondientes a las provisiones, se constituya una fiducia, cuyos rendimientos pertenecerán al deudor.

Finalmente, es de resaltar que esta modificación resulta especialmente útil pues en la legislación actual se ha permitido que un proceso en contra de la deudora altere sustancialmente los términos del acuerdo concordatario, al no tener el demandante la obligación de hacerse parte en el concordato, en el entendido que su derecho nace una vez se encuentre en firme la respectiva providencia de condena.

13. ACREEDORES EXTEMPORANEOS

Esta disposición concebida en el proyecto en la forma prevista por el Decreto 350 de 1989, ha generado muchos problemas en la práctica,

como quiera que gran número de acreedores, incluso relacionados por el empresario, fundamentalmente proveedores en cuantías pequeñas no concurren oportunamente al trámite del concordato, quedando sujetos al eventual reconocimiento que pueda darse en la audiencia preliminar por parte de los demás acreedores y del deudor, el cual se encuentra condicionado al hecho de que se hayan conciliado la totalidad de las objeciones en la audiencia preliminar, lo cual se constituye en óbice para permitir a dichos acreedores su participación en el concordato, por lo que se adiciona la posibilidad de reconocimiento a la audiencia final.

14. DE LAS RESERVAS MIENTRAS DECIDE LA JUSTICIA ORDINARIA

En consideración que la disposición en la forma contenida en el proyecto no consulta la legislación en materia contable y conlleva en muchos casos una doble contabilización del pasivo contingente o sujeto a decisión judicial, se modifica la propuesta presentada y se ordena que dichos créditos se regulen como créditos litigiosos, sujetos a las reglas anteriormente expuestas.

15. GASTOS DE ADMINISTRACION

Toda vez que el concepto de gastos de administración obedece al manejo propio de la operación de la deudora y como quiera que permite la inclusión de obligaciones no relacionadas directamente con ella, se modifica dicho término por el de obligaciones postconcordatarias, lo cual evita la utilización de sutiles interpretaciones a fin de sustraerse del cumplimiento de obligaciones adquiridas con posterioridad al inicio del trámite del concordato.

Finalmente en este análisis se hace importante destacar la necesidad de que el proyecto con las modificaciones presentadas sea acogido por la Cámara de Representantes, pues él cumplió el propósito esencial de toda legislación, en el sentido de servir de mecanismo o herramienta de solución de los precisos problemas que puedan presentarse entre los destinatarios de la norma, conservando la orientación inicial en el sentido de reconocer la utilidad de la legislación actual en esta materia (Decreto 350 de 1989), pero solucionando los inconvenientes que presenta, a fin de hacerla más ágil y expedita.

En vista de lo anterior, respetuosamente nos permitimos proponer que con las modificaciones sugeridas se apruebe en segundo debate el Proyecto de Ley en cuestión.

CAMARA DE REPRESENTANTES
COMISION TERCERA
CONSTITUCIONAL PERMANENTE
SECRETARIA GENERAL

Santafé de Bogotá, D. C., abril 21 de 1995

En la fecha fue recibida en esta Secretaría la ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 119/93 y 163/93 Cámara (acumulados) "por la cual se modifica el Código de

Comercio, se expide un nuevo Régimen de Procesos Concursales, y se dictan otras disposiciones".

El Secretario General,

Herman Ramírez Rosales.

PROYECTO DE LEY No. 119-93 CAMARA Y 163-93 CAMARA ACUMULADOS

por el cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA

TITULO I

REGIMEN DE SOCIEDADES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1o. SOCIEDAD COMERCIAL Y AMBITO DE APLICACION DE ESTA LEY. El inciso segundo del artículo 100 del Código de Comercio, quedará así:

Sin embargo, las sociedades, cualquiera que sea su objeto, estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil.

Artículo 2o. CAPACIDAD DE LOS SOCIOS. El artículo 103 del Código de Comercio quedará así:

Artículo 103. Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita.

En los demás casos, podrán ser socios, siempre que actúen por conducto de sus representantes o con su autorización, según el caso. Para el aporte de derechos reales sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 111.

CAPITULO II

ESCISION

Artículo 3o. MODALIDADES.

Habrà Escisión cuando:

1. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de su patrimonio o empresa a una o más sociedades existentes o las destina a la creación de una o varias sociedades.

2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio o empresa en dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas sociedades.

La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes de la escisión, se denominarán sociedades beneficiarias.

Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las sociedades beneficiarias en la forma y proporción establecida en el proyecto de escisión.

Artículo 4o. PROYECTO DE ESCISION.

El proyecto de escisión deberá ser aprobado por la junta de socios o asamblea general de

accionistas de la sociedad que se escinde. Cuando en el proceso de escisión participen sociedades beneficiarias ya existentes se requerirá, además, la aprobación de la asamblea o junta de cada una de ellas. La decisión respectiva se adoptará con la mayoría prevista en la ley o en los estatutos para las reformas estatutarias.

El proyecto de escisión deberá contener por lo menos las siguientes especificaciones:

1. Los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará.

2. El nombre de las sociedades que participen en la escisión.

3. En el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma.

4. La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se transfieren a las sociedades beneficiarias.

5. El reparto entre los socios de la sociedad escidente, de las cuotas, acciones o partes de interés que les corresponderán en las sociedades beneficiarias, con explicación de los métodos de evaluación utilizados.

6. La opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos.

7. Estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de escisión debidamente certificados y acompañados de un dictamen emitido por el revisor fiscal y en su defecto por contador público independiente.

8. La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se disuelven habrán de considerarse realizadas para efectos contables, por cuenta de la sociedad a la que traspasan su patrimonio. Dicha estipulación sólo produce efectos entre las sociedades participantes en la escisión y entre los respectivos socios.

Artículo 5o. PUBLICIDAD.

Los representantes legales de las sociedades que intervienen en el proceso de escisión publicarán en el diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el domicilio social de cada una de las sociedades participantes, un aviso que contendrá los requerimientos previstos en el artículo 174 del Código de Comercio.

Adicionalmente, el representante legal de cada sociedad participante comunicará el acuerdo de escisión a los acreedores sociales, mediante telegrama o por cualquier otro medio que produzca efectos similares.

Artículo 6o. DERECHOS DE LOS ACREE- DORES

Los acreedores de las sociedades que participen en la escisión, que sean titulares de deudas adquiridas con anterioridad a la publicación a que se refiere el artículo anterior, podrán, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso, exigir garantías satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos, siempre que no dispongan de dichas garantías. La solicitud se tramitará en la misma forma y producirá los mismos efectos previstos para la fusión.

Lo dispuesto en el presente artículo no procederá cuando como resultado de la escisión los activos de la sociedad escidente y de las beneficiarias, según el caso, representen por lo menos el doble del pasivo externo.

PARAGRAFO. - Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo los administradores de la sociedad escidente tendrán a disposición de los acreedores el proyecto de escisión, durante el término en que puede ejercerse el derecho de oposición.

Artículo 7o. DERECHOS DE LOS TENEDORES DE BONOS.

Los tenedores de bonos de las sociedades participantes en la escisión tendrán los derechos previstos en el artículo 83 de la Resolución 1447 de 1994 expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores y demás normas concordantes. Igualmente tendrán el derecho de información previsto en el presente capítulo.

Artículo 8o. PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCISION.

El acuerdo de escisión deberá constar en escritura pública, que contendrá, además, los estatutos de las nuevas sociedades o las reformas que se introducen a los estatutos de las sociedades existentes. Dicha escritura será otorgada únicamente por los representantes legales de estas últimas. En ella, deberán protocolizarse los siguientes documentos:

1. El permiso para la escisión en los casos en que de acuerdo con las normas sobre prácticas comerciales restrictivas, fuere necesario;
2. El acta o actas en que conste el acuerdo de escisión;
3. La autorización para la escisión por parte de la entidad de vigilancia en caso de que en ella participe una o más sociedades sujetas a tal vigilancia;
4. Los estados financieros certificados y dictaminados, de cada una de las sociedades participantes, que hayan servido de base para la escisión.

Copia de la escritura de escisión se registrará en la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio social de cada una de las sociedades participantes en el proceso de escisión.

Artículo 9o. EFECTOS DE LA ESCISION.

Una vez inscrita en el Registro Mercantil la escritura a que se refiere el artículo anterior, operará, entre las sociedades intervinientes en la escisión y frente a terceros la transferencia en bloque de los activos y pasivos de la sociedad escidente a las beneficiarias, sin perjuicio de lo previsto en materia contable.

Para las modificaciones del derecho de dominio sobre inmuebles y demás bienes sujetos a registro bastará con enumerarlos en la respectiva escritura de escisión, indicando el número de folio de matrícula inmobiliaria o el dato que identifique el registro del bien o derecho respectivo. Con la sola presentación de la escritura de escisión deberá procederse al registro correspondiente.

Cuando disuelta la sociedad escidente, alguno de sus activos no fuere atribuido en el acuerdo de escisión a ninguna de las sociedades beneficiarias, se repartirá entre ellas en proporción al activo que les fue adjudicado.

A partir de la inscripción en el registro Mercantil de la escritura de escisión, la sociedad o sociedades beneficiarias asumirán las obligaciones que les correspondan en el acuerdo de escisión y adquirirán los derechos y privilegios inherentes a la empresa o empresas que se les hubiere transferido. Así mismo, la sociedad escidente, cuando se disolviera, se entenderá liquidada.

Artículo 10. RESPONSABILIDAD.

Cuando una sociedad beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones que asumió por la escisión o lo haga la escidente respecto de obligaciones anteriores a la misma, las demás sociedades participantes responderán solidariamente por el cumplimiento de la respectiva obligación. En este caso, la responsabilidad se limitará a los activos netos que les hubieren correspondido en el acuerdo de escisión.

En caso de disolución de la sociedad escidente y sin perjuicio de lo dispuesto en materia tributaria, si alguno de los pasivos de la misma no fuere atribuido especialmente a alguna de las sociedades beneficiarias, estas responderán solidariamente por la correspondiente obligación.

Artículo 11. NORMAS APLICABLES A LA FUSION.

En los casos de fusión, se aplicará, además de lo consagrado en el Código de Comercio, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5 de esta ley.

CAPITULO III

DERECHO DE RETIRO

Artículo 12. EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO.

Cuando la transformación, fusión o escisión impongan a los socios una mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de la sociedad.

En las sociedades por acciones también procederá el ejercicio de este derecho en los casos de cancelación voluntaria de la inscripción en el Registro Nacional de Valores o en bolsa de valores.

PARAGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá que existe desmejora de los derechos patrimoniales de los socios, entre otros, en los siguientes casos:

1. Cuando se disminuya el porcentaje de participación del socio en el capital de la sociedad.
2. Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción, cuota o parte de interés o se reduzca el valor nominal de la acción o cuota, siempre que en este caso se produzca una disminución de capital.

3. Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción.

Artículo 13. PUBLICIDAD.

El proyecto de escisión, fusión o las bases de la transformación deberán mantenerse a disposición de los socios en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio principal, por lo menos con 15 días hábiles de antelación a la reunión en la que vaya a ser considerada la propuesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión, deberá incluirse dentro del orden del día el punto referente a la escisión, fusión, transformación o cancelación de la inscripción e indicar expresamente la posibilidad que tienen los socios de ejercer el derecho de retiro.

La omisión de cualquiera de los requisitos previstos en el presente artículo, hará ineficaces las decisiones relacionadas con los referidos temas.

Artículo 14. EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO Y EFECTOS.

Los socios ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se adoptó la respectiva decisión. La manifestación de retiro del socio se comunicará por escrito al representante legal.

El receso produce efectos frente a la sociedad desde el momento en que se reciba la comunicación escrita del socio y frente a terceros desde su inscripción en el Registro Mercantil o en el libro de registro de accionistas. Para que proceda el registro bastará la comunicación del representante legal o de quien ejerce el derecho de retiro.

En todos los casos en que haya lugar al derecho de retiro, este deberá ejercerse dentro del mes siguiente a la fecha en que se adoptó la respectiva decisión. La manifestación de receso del socio se comunicará por escrito al representante legal.

El receso produce efectos frente a la sociedad desde el momento en que se reciba la comunicación escrita del socio y frente a terceros desde su inscripción en el registro mercantil o en el libro de registro de accionistas.

Salvo pacto arbitral, en caso de discrepancia sobre la ocurrencia de la causal de retiro, el trámite correspondiente se adelantará ante la entidad estatal que ejerza la inspección, vigilancia o control.

Si la asamblea de accionistas o junta de socios, dentro de los sesenta días siguientes a la adopción de la decisión, la revoca, caduca el derecho de receso y los socios que lo ejercieron, readquieren sus derechos, retrotrayéndose los de naturaleza patrimonial al momento en que se notificó el retiro al representante legal.

Artículo 15. OPCION DE COMPRA.

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del retiro, la sociedad ofrecerá las acciones, cuotas o partes de interés a los demás socios para que estos las adquieran dentro de los

quince días siguientes, a prorrata de su participación en el capital social. Cuando los socios no adquieran la totalidad de las acciones, cuotas o partes de interés, la sociedad, dentro de los cinco días siguientes, las readquirirá siempre que existan utilidades líquidas o reservas constituidas para el efecto. El precio de compra se fijará en la forma prevista en el artículo siguiente.

Artículo 16. REEMBOLSO

En los casos en que los socios o la sociedad no adquieran la totalidad de las acciones, cuotas o partes de interés, el retiro dará derecho a quien lo ejerza a exigir el reembolso de las cuotas, acciones o partes de interés restantes. El valor correspondiente se calculará de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, el avalúo se hará por peritos designados por la Cámara de Comercio del domicilio social. Dicho avalúo será obligatorio. En los estatutos podrán fijarse métodos diferentes para establecer el valor del reembolso.

Salvo pacto en contrario, el reembolso deberá realizarse dentro de los dos meses siguientes al acuerdo o al dictamen pericial. Sin embargo, si la sociedad demuestra que el reembolso dentro de dicho término afectará su estabilidad económica, podrá solicitar a la entidad estatal que ejerza la inspección, vigilancia o control, que establezca plazos adicionales no superiores a un año. Durante el plazo adicional se causarán intereses a la tasa corriente bancaria.

Dentro de los dos meses siguientes a la adopción de la decisión respectiva, la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control, podrá, de oficio o a petición de interesado, determinar la improcedencia del derecho de retiro, cuando establezca que el reembolso afecte sustancialmente la prenda común de los acreedores.

PARAGRAFO. Sin perjuicio de lo previsto en materia de responsabilidad de los socios colectivos, quienes ejerzan el derecho de retiro en los términos previstos en la ley, responderán en forma subsidiaria y hasta el monto de lo reembolsado, por las obligaciones sociales contraídas hasta la inscripción del retiro en el Registro Mercantil. Dicha responsabilidad cesará transcurrido un año desde la inscripción del retiro en el Registro Mercantil.

Artículo 17. NORMAS ESPECIALES.

Será ineficaz toda estipulación que despoje a los socios del derecho de retiro o que modifique su ejercicio o lo haga nugatorio. Sin embargo, será válida la renuncia del derecho de retiro, después del nacimiento del mismo. La renuncia opera independientemente para cada causal de retiro.

Lo dispuesto en esta ley en materia de receso, no se aplicará a las sociedades sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria.

CAPITULO IV ORGANOS SOCIALES

SECCION I

ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS

Artículo 18. REPRESENTACION DE LOS SOCIOS. El artículo 184 del Código de Comercio quedará así:

Artículo 184. Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta de Socios o Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este puede sustituirlo, si es del caso, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere y los demás requisitos que se señalen en los estatutos.

Los poderes otorgados en el exterior, solo requerirán las formalidades aquí previstas.

Artículo 19. REUNIONES NO PRESENCIALES.

Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la junta de socios, de asamblea general de accionistas o de junta directiva cuando por cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado.

Artículo 20. OTRO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES.

Serán válidas las decisiones del máximo órgano social o de la junta directiva cuando por escrito, todos los socios o miembros expresen el sentido de su voto. En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de las partes de interés, cuotas o acciones en circulación o de los miembros de la junta directiva, según el caso. Si los socios o miembros hubieren expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a partir de la primera comunicación recibida.

El representante legal informará a los socios o miembros de junta el sentido de la decisión, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto.

Artículo 21. ACTAS.

En los casos a que se refieren los artículos 19 y 20 precedentes, las actas correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquel en que concluyó el Acuerdo. Las actas serán suscritas por el representante legal y el secretario de la sociedad. A falta de este último, serán firmadas por alguno de los asociados o miembros.

PARAGRAFO. Serán ineficaces las decisiones adoptadas conforme al artículo 19 de esta ley, cuando alguno de los socios o miembros no participe en la comunicación simultánea o suce-

siva. La misma sanción se aplicará a las decisiones adoptadas de acuerdo con el artículo 20, cuando alguno de ellos no exprese el sentido de su voto o se exceda del término de un mes allí señalado.

SECCION II

ADMINISTRADORES

Artículo 22. ADMINISTRADORES.

Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

Artículo 23. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES.

Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados.

En el cumplimiento de su función los administradores deberán:

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.

3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal.

4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.

5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.

6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos.

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas.

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. El artículo 200 del Código de Comercio quedará así:

Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.

No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador.

De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal.

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.

Artículo 25. ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD.

La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social.

La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador.

Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros.

CAPITULO V

MATRICES Y SUBORDINADAS

Artículo 26. SUBORDINACION. El artículo 260 del Código de Comercio quedará así:

Artículo 260. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se

denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.

Artículo 27. PRESUNCIONES DE SUBORDINACION. El artículo 261 del Código de Comercio quedará así:

Artículo 261. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.

PARAGRAFO PRIMERO. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una persona jurídica de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales aquellos posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configuren la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.

PARAGRAFO SEGUNDO. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el párrafo anterior.

Artículo 28. GRUPO EMPRESARIAL.

Habrà grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección.

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas.

Artículo 29. INFORME ESPECIAL.

En los casos de grupo empresarial, los administradores de las sociedades controladas deberán presentar un informe especial a la asamblea o junta de socios, en el que se expresará la intensidad de las relaciones económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la respectiva sociedad controlada.

Dicho informe, que se presentará en las fechas señaladas en los estatutos o la ley para las reuniones ordinarias, deberá dar cuenta, cuando menos, de los siguientes aspectos:

1. Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio respectivo, de manera directa o indirecta, entre la controlante o sus filiales o subsidiarias con la sociedad controlada;

2. Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio respectivo, entre la sociedad controlada y otras entidades, por influencia o en interés de la controlante; y

3. Las decisiones de mayor importancia que la sociedad haya tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de la controlante.

La Superintendencia de Sociedades, o en su caso la de Valores o Bancaria, podrá en cualquier tiempo, a solicitud de interesado, constatar la veracidad del contenido del informe especial y si es del caso, adoptar las medidas que fueren pertinentes.

Artículo 30. OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL.

Cuando en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, se configure una situación de control, esta se hará constar en documento privado que deberá contener el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento se inscribirá en el registro mercantil correspondiente a la circunscripción de los vinculados, a solicitud de cualquiera de ellos.

Si se omitiere la inscripción a que alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades, o en su caso la de Valores o Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción en el Registro Mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a que haya lugar por dicha omisión.

En los casos en que se den los supuestos para que exista grupo empresarial se aplicará la presente disposición.

PARAGRAFO PRIMERO. Las Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer constar en el certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz o subordinada que tenga la sociedad así como su vinculación a un grupo empresarial, de acuerdo con los criterios previstos en la presente ley.

PARAGRAFO SEGUNDO. Toda modificación de la situación de control o del grupo, se inscribirá en el Registro Mercantil. Cuando dicho requisito se omita, la entidad estatal que ejerza la inspección, vigilancia o control de cualquiera de las vinculadas podrá en los términos señalados en este artículo, ordenar la inscripción correspondiente.

Artículo 31. COMPROBACION DE OPERACIONES DE SOCIEDADES SUBORDINADAS. El artículo 265 del Código de Comercio quedará así:

Artículo 265. Los respectivos organismos de inspección, vigilancia o control, podrán com-

probar la realidad de las operaciones que se celebren entre una sociedad y sus vinculados. En caso de verificar la irrealidad de tales operaciones o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, de los socios o de terceros, impondrán multas y si lo considera necesario, ordenarán la suspensión de tales operaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de socios y terceros a que haya lugar para la obtención de las indemnizaciones correspondientes.

Artículo 32. PROHIBICION A SOCIEDADES SUBORDINADAS. El artículo 262 del Código de Comercio quedará así:

Artículo 262. Las sociedades subordinadas no podrán tener a ningún título, partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o controlen. Serán ineficaces los negocios que se celebren, contrariando lo dispuesto en este artículo.

Artículo 33. PAGO DEL DIVIDENDO EN ACCIONES O CUOTAS. Al artículo 455 del Código de Comercio se adiciona el siguiente párrafo:

PARAGRAFO. En todo caso, cuando se configure una situación de control en los términos previstos en la ley, sólo podrá pagarse el dividendo en acciones o cuotas liberadas de la misma sociedad, a los socios que así lo acepten.

CAPITULO VI

ESTADOS FINANCIEROS

Artículo 34. OBLIGACION DE PREPARAR Y DIFUNDIR ESTADOS FINANCIEROS.

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente certificados. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si ésta existiere.

El Gobierno Nacional podrá establecer casos en los cuales, en atención al volumen de los activos o de ingresos sea admisible la preparación y difusión de estados financieros de propósito general abreviados.

Las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia o control, podrán exigir la preparación y difusión de estados financieros de períodos intermedios. Estos estados serán idóneos para todos los efectos, salvo para la distribución de utilidades.

Artículo 35. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

La matriz o controlante, además de preparar y presentar estados financieros de propósito general individuales, deben preparar y difundir estados financieros de propósito general consolidados, que presenten la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus subordinados o dominados, como si fuesen los de un solo ente.

Los estados financieros de propósito general consolidados deben ser sometidos a consideración de quien sea competente, para su aprobación o improbación. La distribución de utilidades de una matriz o controlante se hará con fundamento en los estados financieros de que trata este inciso.

Las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o controlante por el método de participación patrimonial.

Artículo 36. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NORMAS DE PREPARACION.

Los estados financieros estarán acompañados de sus notas, con las cuales conforman un todo indivisible. Los estados financieros y sus notas se prepararán y presentarán conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Artículo 37. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS.

El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de los libros.

Artículo 38. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS.

Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas.

Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión "ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente, que contendrá como mínimo las manifestaciones exigidas por el reglamento.

Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia.

Artículo 39. AUTENTICIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LOS DICTAMENES.

Salvo prueba en contrario, los estados financieros certificados y los dictámenes correspondientes se presumen auténticos.

Artículo 40. RECTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Las entidades gubernamentales que ejercen inspección, vigilancia o control, podrán ordenar rectificar los estados financieros o las notas que no se ajusten a las normas legales.

Tratándose de estados financieros de fin de ejercicio, las rectificaciones afectarán el período

objeto de revisión, siempre que se notifique dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se hayan presentado en forma completa ante la respectiva autoridad. Pasado dicho lapso las rectificaciones se reconocerán en el ejercicio en curso.

Las rectificaciones se darán a conocer al difundir los estados financieros respectivos y, en todo caso, en la forma y plazo que determine la respectiva entidad gubernamental.

Sin perjuicio de los recursos a que hubiere lugar, la orden de rectificación tendrá efectos inmediatos.

Artículo 41. PUBLICIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Dentro del mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, se depositará copia de los estados financieros de propósito general, junto con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio del domicilio social. Esta expedirá copia de tales documentos a quienes se lo soliciten y paguen los costos correspondientes.

Sin embargo, las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigilancia o control podrán establecer casos en los cuales no se exija dicho depósito o se requiera un medio de publicidad adicional. También podrán ordenar la publicidad de los estados financieros intermedios.

La Cámara de Comercio deberá conservar, por cualquier medio, los documentos mencionados en este artículo por el término de cinco años.

Artículo 42. AUSENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS.

Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, cuando sin justa causa una sociedad se abstuviere de preparar o difundir estados financieros estando obligada a ello, los terceros podrán aducir cualquier otro medio de prueba aceptado por la ley.

Los administradores y el revisor fiscal, responderán por los perjuicios que causen a la sociedad, a los socios o a terceros por la no preparación o difusión de los estados financieros.

Artículo 43. RESPONSABILIDAD PENAL.

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes a sabiendas:

1. Suminstren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad.

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros o en sus notas.

Artículo 44. EXPEDICION DE REGLAMENTOS.

Corresponde al Gobierno Nacional expedir la reglamentación sobre:

1. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas de auditoría generalmente aceptadas y las demás normas reglamentarias sobre la materia. Tales principios

comprenderán, entre otros temas, el marco conceptual de la contabilidad, así como disposiciones sobre reconocimiento, estados financieros, libros, comprobantes y soportes.

2. Los libros, comprobantes y soportes que deberán elaborarse para servir de fundamento de los estados financieros, así como los requisitos mínimos que deberán cumplir unos y otros.

3. Los libros que deberán registrarse, los requisitos de tal registro y la entidad ante quien se deba cumplir la diligencia correspondiente.

4. Las reglas que deberán observarse para la conservación, consulta, reproducción y destrucción de los documentos indicados en el numeral 2 de este artículo.

5. Los casos en los cuales deban presentarse estados financieros comparativos, indicando la forma de hacerlo, así como los períodos que deberán incluirse en la comparación.

Continuarán vigentes las facultades que en materia de contabilidad e información actualmente tienen las entidades gubernamentales del orden nacional. Las normas que expidan dichas entidades deberán sujetarse al marco conceptual y a las técnicas generales que sean expedidas por el Gobierno.

Artículo 45. RENDICION DE CUENTAS.

Los administradores deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retiren de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión.

La aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los administradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, asesores o revisores fiscales.

Artículo 46. RENDICION DE CUENTAS AL FIN DE EJERCICIO.

Terminado cada ejercicio contable, en la oportunidad prevista en la ley o en los estatutos, los administradores deberán presentar a la asamblea o junta de socios para su aprobación o improbación, los siguientes documentos:

1. Un informe de gestión.
2. Los estados financieros de propósito general, junto con sus notas, cortados a fin del respectivo ejercicio.
3. Un proyecto de distribución de las utilidades repartibles.

Así mismo presentarán los dictámenes sobre los estados financieros y los demás informes emitidos por el revisor fiscal o por contador público independiente.

Artículo 47. INFORME DE GESTION.

El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la sociedad.

El informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre:

1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.

2. La evolución previsible de la sociedad.

3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores.

El informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de quienes deban presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no lo compartieren.

Artículo 48. DERECHO DE INSPECCION.

Los socios podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y papeles de la sociedad, en los términos establecidos en la ley, en las oficinas de la administración que funcionen en el domicilio principal de la sociedad. En ningún caso, este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad.

Las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección serán resueltas por la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control. En caso de que la autoridad considere que hay lugar al suministro de información, impartirá la orden respectiva.

Los administradores que impidieren el ejercicio del derecho de inspección o el revisor fiscal que conociendo de aquel incumplimiento se abstuviere de denunciarlo oportunamente, incurrirán en causal de remoción. La medida deberá hacerse efectiva por la persona u órgano competente para ello o, en subsidio, por la entidad gubernamental que ejerza la inspección, vigilancia o control del ente.

Artículo 49. APLICACION A OTRAS PERSONAS.

Lo dispuesto en el presente capítulo se aplicará a las personas jurídicas de cualquier naturaleza y a las sociedades de hecho. También se aplicará en lo pertinente a los patrimonios de afectación y a los comerciantes personas naturales.

El Gobierno Nacional podrá determinar casos en que no haya lugar a la aplicación de lo dispuesto en este capítulo.

CAPITULO VII

SOCIEDAD ANONIMA

SECCION I

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

Artículo 50. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.

La sociedad anónima podrá constituirse por acto único o por suscripción sucesiva, sin perjuicio de las normas que regulen lo referente a la oferta pública.

SECCION II

CONSTITUCION POR SUSCRIPCION SUCESIVA

Artículo 51. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCION POR SUSCRIPCION SUCESIVA.

En la constitución por suscripción sucesiva, los promotores elaborarán el programa de fundación junto con el folleto informativo de promoción de las acciones objeto de la oferta.

El programa de fundación será suscrito por todos los promotores.

El folleto informativo deberá ser suscrito además, por los representantes de las entidades que se encarguen de la colocación de la emisión o del manejo de los recursos provenientes de la suscripción.

El programa de fundación y el folleto informativo se inscribirán en la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde se vaya a establecer el domicilio principal de la sociedad.

Artículo 52. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE FUNDACION.

El programa de fundación contendrá, por lo menos, las siguientes estipulaciones:

1. El nombre, nacionalidad, identificación y domicilio de todos los promotores.
2. El proyecto de los estatutos.
3. El número, clase y valor nominal de las acciones.
4. El monto mínimo al que deberá ascender el capital suscrito, el número de emisiones, el plazo, y demás condiciones para la suscripción de acciones y el nombre de la entidad donde los suscriptores deben pagar la suma de dinero que están obligados a entregar para suscribirlas.
5. Cuando se proyecten aportes en especie, se indicarán las características que deberán tener y las condiciones para su recibo.
6. La forma de hacer la convocatoria para la asamblea general constitutiva y las reglas conforme a las cuales deba celebrarse.
7. La participación concedida a los promotores, si fuere el caso.
8. La forma como deberán manejarse los rendimientos provenientes del capital aportado y los gastos en que incurran los promotores.

Artículo 53. CONTENIDO DEL CONTRATO DE SUSCRIPCION.

El contrato de suscripción constará por escrito y contendrá, por lo menos, las siguientes especificaciones:

1. El nombre, nacionalidad, domicilio e identificación del suscriptor.
2. El nombre y domicilio de la futura sociedad.
3. El número, naturaleza y valor nominal de las acciones que suscribe.
4. La forma y condiciones en que el suscriptor se obliga a pagar.
5. Cuando las acciones hayan de pagarse con aportes en especie, la determinación de éstos.
6. La declaración expresa de que el suscriptor conoce y acepta el programa de fundación.
7. La fecha de suscripción y firma del suscriptor.

Artículo 54. FORMA Y EPOCA DE PAGO DEL VALOR SUSCRITO.

Los suscriptores depositarán en la entidad designada en el programa de fundación, las sumas de dinero que se hubieren obligado a desembolsar. En caso que el pago sea por instalamentos, se cubrirá por lo menos la tercera parte del valor de cada acción suscrita; el plazo para el pago total de las cuotas pendientes no excederá de un año contado desde la fecha de suscripción.

Si los suscriptores incumplieren las obligaciones a que alude el inciso anterior, los promotores podrán exigir judicialmente el cumplimiento o imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas.

Artículo 55. RESOLUCION DE CONTRATOS.

Si no se ha previsto en el programa de fundación la posibilidad de constituir la sociedad con un monto inferior al anunciado y la suscripción no se cubre en su totalidad dentro del plazo previsto, los contratos de suscripción se resolverán de pleno derecho y la entidad respectiva, reintegrará la totalidad depositada a cada suscriptor, junto con los rendimientos que le correspondieren, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará cuando por cualquier motivo no se constituya la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar. En tal caso, el plazo para reintegrar lo depositado se contará desde cuando se informe por los promotores o el representante legal designado, a la entidad respectiva, el fracaso de la suscripción, aviso que deberá darse dentro de los cinco (5) días siguientes a éste.

Artículo 56. PROHIBICION DE DISPONER DE LOS APORTES.

No podrá disponerse de los aportes mientras no se otorgue la escritura pública de constitución de la sociedad, salvo para cubrir los gastos necesarios para su constitución.

Artículo 57. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE.

Cumplido el proceso de suscripción, los promotores, dentro de los quince días siguientes, convocarán a la asamblea general constituyente en la forma y plazo previstos en el programa de fundación.

Si se convoca la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Si la segunda reunión tampoco se celebra por falta de quórum, se dará por terminado el proceso de constitución y se aplicará lo dispuesto para el caso del fracaso de la suscripción.

Artículo 58. DECISIONES.

En la asamblea constituyente cada suscriptor tendrá tantos votos como acciones haya suscrito.

Las decisiones se tomarán por un número plural de suscriptores que represente, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas.

En caso de que existan aportes en especie, los interesados no podrán votar los acuerdos que deban aprobarlos. En este evento, la mayoría se formará con los votos de las acciones restantes.

Artículo 59. TEMARIO DE LA REUNION.

La asamblea general constituyente decidirá sobre los siguientes temas:

1. Aprobación de la gestión realizada por los promotores.
2. Aprobación de los estatutos.
3. Examinar y en su caso aprobar el avalúo de los aportes en especie, si los hubiere.
4. Designación de representante legal, junta directiva y revisor fiscal.

Los promotores que también fueren suscriptores no podrán votar el punto primero.

PARAGRAFO. - Si en la asamblea general constitutiva se cambian las actividades principales previstas en el objeto social, los suscriptores ausentes o disidentes podrán retirarse dentro de los quince días siguientes a la celebración de la asamblea, comunicando dicha decisión por escrito al representante legal designado por la asamblea constitutiva. En este evento, el suscriptor podrá pedir la restitución de los aportes con los frutos que hubieren producido, si a ello hubiere lugar.

Para los efectos anteriores, cuando se adopte dicha decisión, el representante legal designado deberá comunicarla inmediatamente a los suscriptores ausentes mediante telegrama u otro medio que produzca efectos similares.

Si como consecuencia de lo dispuesto en el presente párrafo se disminuye el capital previsto para la constitución de la sociedad, ésta podrá formalizarse siempre y cuando la decisión sea aprobada por un número de suscriptores que representen no menos de la mitad más una de las acciones suscritas restantes. En caso contrario, se entenderá fracasada la suscripción.

Artículo 60. FORMALIZACION DE LA CONSTITUCION Y RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES.

Si dentro de los seis meses siguientes a la celebración de la asamblea, no se ha otorgado la escritura de constitución, los suscriptores podrán exigir la restitución de los aportes junto con los frutos que hubieren producido, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el representante legal.

En todo caso, los promotores responderán solidaria e ilimitadamente por las obligaciones contraídas para la constitución de la sociedad, hasta la celebración de la asamblea general constituyente.

Artículo 61. INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL Y EFECTOS.

Constituida la sociedad, esta asumirá las obligaciones contraídas legítimamente por los

promotores y restituirá los gastos realizados por éstos, siempre y cuando su gestión haya sido aprobada por la asamblea general constituyente.

Igualmente, asumirá las obligaciones contraídas por el representante legal en cumplimiento de sus deberes.

En ningún caso los suscriptores serán responsables por las obligaciones mencionadas en este artículo.

SECCION III**ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO****Artículo 62. SOCIEDADES QUE PUEDEN EMITIRLAS.**

Las sociedades por acciones podrán emitir acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las cuales tendrán el mismo valor nominal de las acciones ordinarias y no podrán representar más del cincuenta por ciento del capital suscrito.

La emisión se hará cuando así lo decida la asamblea general de accionistas.

Artículo 63. APROBACION DEL REGLAMENTO DE SUSCRIPCION.

El reglamento de suscripción de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto deberá ser aprobado por la asamblea general de accionistas, salvo que ésta, al disponer la emisión, delegue tal atribución en la junta directiva.

Artículo 64. DERECHOS.

Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto darán a su titular el derecho a percibir un dividendo mínimo, acumulativo o no, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de suscripción respectivo y en caso de disolución de la sociedad, el de reembolso preferencial de los aportes una vez pagado el pasivo externo. Así mismo, otorgará los demás derechos previstos para las acciones ordinarias, salvo el de participar en la asamblea de accionistas y votar en ella.

No obstante, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, darán a sus titulares el derecho a voto, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las condiciones o derechos fijados para dichas acciones. En este caso, se requerirá el voto favorable del 70% de las acciones en que se encuentre dividido el capital suscrito, incluyendo en dicho porcentaje y en la misma proporción el voto favorable de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.

2. Cuando se vaya a votar la conversión en acciones ordinarias de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. En este caso, se aplicará la misma mayoría señalada en el numeral anterior.

3. En los demás casos que se señalen en el reglamento de suscripción.

Artículo 65. NO PAGO DEL DIVIDENDO.

Si al cabo de un ejercicio social, la sociedad no genera utilidades que le permitan cancelar el dividendo mínimo y la Superintendencia de Sociedades o en su caso, la de Valores o Bancaria, de oficio o a solicitud de tenedores de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto que representen por lo menos el 10% de estas acciones, establezca que se han ocultado o distraído beneficios que disminuyan las utilidades a distribuir, podrá determinar que los titulares de estas acciones participen con voz y voto en la asamblea general de accionistas, hasta tanto se verifique que han desaparecido las irregularidades que dieron lugar a esta medida.

En todo caso se causarán intereses de mora a cargo de la sociedad, por la parte del dividendo mínimo preferencial que no fue oportunamente liquidada en razón de la distracción u ocultamiento de utilidades.

Artículo 66. TITULOS.

Además de los requisitos generales, en los títulos de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, deberán indicarse los derechos especiales que ellos confieren.

Artículo 67. REGLAMENTACION.

Sin perjuicio de lo dispuesto para los casos de oferta pública, el Gobierno Nacional reglamentará todo lo referente a las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto de que trata esta sección.

SECCION IV**OTRAS DISPOSICIONES****Artículo 68. CONVOCATORIA.**

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Comercio y en el artículo 13 de esta ley, cuando en las sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de valores, se pretenda debatir el aumento del capital autorizado o la disminución del suscrito, deberá incluirse el punto respectivo dentro del orden del día señalado en la convocatoria. La omisión de este requisito hará ineficaz la decisión correspondiente.

En estos casos, los administradores de la sociedad elaborarán un informe sobre los motivos de la propuesta, que deberá quedar a disposición de los accionistas en las oficinas de administración de la sociedad, durante el término de la convocatoria.

Artículo 69. QUORUM Y MAYORIAS.

La asamblea deliberará con un número plural de socios que represente, por lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum inferior.

Con excepción de las mayorías decisorias señaladas en los artículos 155, 420 numeral 5o. y 455 del Código de Comercio, las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes. En los estatutos de las sociedades que no negocien sus acciones en el mercado público de valores, podrá pactarse un quórum diferente o mayorías superiores a las indicadas.

Artículo 70. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA. El artículo 429 del Código de Comercio quedará así:

Artículo 429. Si se convoca a la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural de socios cualquiera sea la cantidad de acciones que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión.

Cuando la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente en los términos del inciso anterior.

En las sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de valores, en las reuniones de segunda convocatoria la asamblea sesionará y decidirá válidamente con uno o varios socios, cualquiera sea el número de acciones representadas.

Artículo 71. ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS.

Dos o más accionistas que no sean administradores de la sociedad, podrán celebrar acuerdos en virtud de los cuales se comprometan a votar en igual o determinado sentido en las asambleas de accionistas. Dicho acuerdo podrá comprender la estipulación que permita a uno o más de ellos o a un tercero, llevar la representación de todos en la reunión o reuniones de la asamblea. Esta estipulación producirá efectos respecto de la sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y que se entregue al representante legal para su depósito en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad. En lo demás, ni la sociedad ni los demás accionistas, responderán por el incumplimiento a los términos del acuerdo.

CAPITULO VIII**EMPRESA UNIPERSONAL****Artículo 72. CONCEPTO DE EMPRESA UNIPERSONAL.**

Mediante la Empresa Unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil.

La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica.

Artículo 73. REQUISITOS DE FORMACION.

La Empresa Unipersonal se creará mediante documento escrito en el cual se expresará:

1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario;
2. Denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión "Empresa Unipersonal", o de su sigla E. U., so pena de que el empresario responda ilimitadamente;

3. El domicilio.

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido.

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio.

6. El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados, con estimación de su valor. El empresario responderá por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo.

Cuando los activos destinados a la empresa comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la empresa deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.

7. El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la empresa.

8. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas.

Delegada totalmente la administración y mientras se mantenga dicha delegación, el empresario no podrá realizar actos y contratos a nombre de la empresa unipersonal.

PARAGRAFO. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya la empresa unipersonal, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en este artículo o cuando a la diligencia de registro no concurra personalmente el constituyente o su representante o apoderado.

Artículo 74. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES.

La responsabilidad de los administradores será la prevista en el régimen general de sociedades.

Artículo 75. APORTACION POSTERIOR DE BIENES.

El empresario podrá aumentar el capital de la empresa mediante la aportación de nuevos bienes. En este caso se procederá en la forma prevista para la constitución de la empresa. La disminución del capital se sujetará a las mismas reglas señaladas en el artículo 145 del Código de Comercio.

Artículo 76. PROHIBICIONES.

En ningún caso el empresario podrá directamente o por interpuesta persona retirar para sí o para un tercero, cualquier clase de bienes pertenecientes a la Empresa Unipersonal, salvo que se trate de utilidades debidamente justificadas.

El titular de la empresa unipersonal no puede contratar con esta, ni tampoco podrán hacerlo entre sí empresas unipersonales constituidas por el mismo titular. Tales actos serán ineficaces de pleno derecho.

Artículo 77. CESION DE CUOTAS.

El titular de la empresa unipersonal, podrá ceder total o parcialmente las cuotas sociales a otras personas naturales o jurídicas, mediante documento escrito que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. A partir de este momento producirá efectos la cesión.

PARAGRAFO. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir la correspondiente cesión cuando a la diligencia de registro no concurran el cedente y el cesionario, personalmente o a través de sus representantes o apoderados.

Artículo 78. CONVERSION A SOCIEDAD.

Cuando por virtud de la cesión o por cualquier otro acto jurídico, la empresa llegare a pertenecer a dos o más personas, deberá convertirse en sociedad comercial para lo cual, dentro de los seis meses siguientes a la inscripción de aquella en el registro mercantil se elaborarán los estatutos sociales de acuerdo con la forma de sociedad adoptada. Estos deberán elevarse a escritura pública que se otorgará por todos los socios e inscribirse en el registro mercantil. La nueva sociedad asumirá, sin solución de continuidad, los derechos y obligaciones de la empresa unipersonal.

Transcurrido dicho término sin que se cumplan las formalidades aludidas, quedará disuelta de pleno derecho y deberá liquidarse.

Artículo 79. JUSTIFICACION DE UTILIDADES.

Las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados por un contador público independiente.

Artículo 80. TERMINACION DE LA EMPRESA.

La empresa unipersonal se disolverá en los siguientes casos:

1. Por voluntad del titular de la empresa.
2. Por vencimiento del término previsto, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su expiración.
3. Por muerte del constituyente cuando así se haya estipulado expresamente en el acto de constitución de la empresa unipersonal o en sus reformas.
4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas.
5. Por orden de autoridad competente.
6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del cincuenta por ciento.
7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria.

En el caso previsto en el numeral segundo anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución se hará constar en documento privado que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente.

No obstante, podrá evitarse la disolución de la empresa adoptándose las medidas que sean del caso según la causal ocurrida, siempre que se haga dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal.

La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el empresario mismo o una persona designada por éste o por la Superintendencia de Sociedades, a solicitud de cualquier acreedor.

Artículo 81. NORMAS APLICABLES A LA EMPRESA UNIPERSONAL.

En lo no previsto en la presente ley, se aplicará a la empresa unipersonal en cuanto sean compatibles, las disposiciones relativas a las sociedades comerciales y, en especial, las que regulan la sociedad de responsabilidad limitada.

Artículo 81. NORMAS APLICABLES A LA EMPRESA UNIPERSONAL.

Así mismo, las empresas unipersonales estarán sujetas, en lo pertinente, a la inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, en los casos que determine el Presidente de la República.

Se entenderán predicables de la empresa unipersonal las referencias que a las sociedades se hagan en los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades previstos en la Constitución o en la ley.

Artículo 82. CONVERSION EN EMPRESA UNIPERSONAL.

Cuando una sociedad se disuelva por la reducción del número de socios a uno, podrá, sin liquidarse, convertirse en empresa unipersonal, siempre que la decisión respectiva se solemnice mediante escritura pública y se inscriba en el registro mercantil dentro de los seis meses siguientes a la disolución. En este caso, la empresa unipersonal asumirá, sin solución de continuidad, los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta.

Artículo 82. CONVERSION EN EMPRESA UNIPERSONAL.

CAPITULO IX

DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Artículo 83. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de Sociedades, la inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales, en los términos establecidos en las normas vigentes.

CAPITULO IX**DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES****Artículo 83. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.**

También ejercerá inspección y vigilancia sobre otras entidades que determine la ley. De la misma manera ejercerá las funciones relativas al cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera, inversión colombiana en el exterior y endeudamiento externo.

Artículo 84. INSPECCION.

La inspección consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o sobre operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Sociedades, de oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas sociedades.

Artículo 84. INSPECCION.

Artículo 85. VIGILANCIA.

La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente.

Artículo 85. VIGILANCIA.

Estarán sometidas a vigilancia, las sociedades que determine el Presidente de la República. También estarán vigiladas aquellas sociedades que indique el Superintendente cuando del análisis de la información señalada en el artículo anterior o de la práctica de una investigación administrativa, establezca que la sociedad incurra en cualquiera de las siguientes irregularidades:

a. Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada de las normas legales o estatutarias.

b. Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de información que no se ajuste a la realidad.

c. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente aceptados.

b. Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.

Respecto de estas sociedades vigiladas, la Superintendencia de Sociedades, además de las facultades de inspección indicadas en el artículo anterior, tendrá las siguientes:

1. Practicar visitas generales, de oficio o a petición de parte, y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades que se hayan observado durante la práctica de éstas e investigar, si es necesario, las operaciones finales o intermedias realizadas por la sociedad visitada con cualquier persona o entidad no sometida a su vigilancia.

2. Autorizar la emisión de bonos de acuerdo con lo establecido en la ley y verificar que se realice de acuerdo con la misma.

3. Enviar delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de socios cuando lo considere necesario.

4. Verificar que las actividades que desarrolle estén dentro del objeto social y ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del mismo.

5. Decretar la disolución, y ordenar la liquidación, cuando se cumplan los supuestos previstos en la ley y en los estatutos, y adoptar las medidas a que haya lugar.

6. Designar al liquidador en los casos previstos por la ley.

7. Autorizar las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión.

8. Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos previstos por la ley.

9. Autorizar la colocación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto y de acciones privilegiadas.

Artículo 86. CONTROL.

El control consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de carácter particular.

En ejercicio del control, la Superintendencia de Sociedades tendrá, además de las facultades indicadas en los artículos anteriores, las siguientes:

1. Promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecución de los mismos.

2. Autorizar la solemnización de toda reforma estatutaria.

3. Autorizar la colocación de acciones y verificar que la misma se efectúe conforme a la ley y al reglamento correspondiente.

4. Ordenar la remoción de administradores, revisor fiscal y empleados, cuando se presenten irregularidades que así lo ameriten.

5. Conminar bajo apremio de multas a los administradores para que se abstengan de realizar actos contrarios a la ley, los estatutos, las decisiones del máximo órgano social o junta directiva, o que deterioren la prenda común de los acreedores u ordenar la suspensión de los mismos.

6. Efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten necesarias de acuerdo con los hechos que se observen en ellas.

7. Convocar a la sociedad al trámite de un proceso concursal.

8. Aprobar el avalúo de los aportes en especie.

PARAGRAFO. Las sociedades sujetas a la vigilancia o control por determinación del Superintendente de Sociedades, podrán quedar exonerados de tales vigilancia o control, cuando así lo disponga dicho funcionario.

Artículo 87. OTRAS FUNCIONES.

Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones:

1. Unificar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las sociedades comerciales sometidas a su inspección, vigilancia y control.

2. Dar apoyo en los asuntos de sus competencias al sector empresarial y a los demás organismos del Estado.

3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos.

4. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de los hechos relacionados con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades, de acuerdo a lo previsto en la ley.

5. Ejercer las funciones que en materia de jurisdicción coactiva le asigne la ley.

6. Aprobar las reservas o cálculos actuariales en los casos en que haya lugar.

7. Autorizar la disminución del capital en cualquier sociedad, cuando la operación implique un efectivo reembolso de aportes.

8. Ordenar la inscripción de acciones en el libro de registro correspondiente, cuando la sociedad se niegue a efectuarla sin fundamento legal.

9. Las demás que le asigne esta ley.

Artículo 88. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.

En todo caso, en cualquier sociedad no sometida a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de Valores, uno o más asociados representantes de no menos del diez por ciento del capital social o alguno de sus administradores, podrán solicitar a la Superintendencia de Sociedades, la adopción de cualquiera de las siguientes medidas administrativas:

1. El envío de delegados a las reuniones de la Asamblea General o Junta de Socios, quienes pueden impartir las orientaciones pertinentes para el adecuado desarrollo de la reunión. El delegado deberá elaborar un informe sobre lo ocurrido en la reunión, que servirá de prueba en actuaciones administrativas o judiciales que se adelanten.

2. La convocatoria de la Asamblea o Junta de Socios cuando quiera que estas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la ley. Para tal fin, en el escrito correspondiente, que se presentará personalmente por los interesados, deberá indicarse ese hecho bajo juramento que se tendrá prestado con la firma del mencionado escrito, al que se acompañarán los documentos que indique el Gobierno por vía reglamentaria.

3. La orden para que se subsanen las irregularidades de las suscripciones de acciones que se adelanten pretermitiendo los requisitos o condiciones consagrados en la ley, en los estatutos o en el reglamento respectivo o las de enajenaciones de acciones efectuadas con desconocimiento de los requisitos exigidos en la ley o en los estatutos para tal fin.

Del escrito contentivo de la solicitud se dará traslado a la sociedad respectiva por el término de diez días a fin de que controvierta los hechos en que se funde la solicitud. Vencido este término y si hay lugar a ello, se dispondrá la práctica de las pruebas solicitadas por los interesados y las que estime pertinentes el Superintendente. Dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del término probatorio, se adoptará la decisión pertinente.

4. La orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones de los estatutos sociales que violen normas legales. La solicitud respectiva deberá contener la relación de las normas que se consideren violadas y el concepto de la violación. Del escrito correspondiente se dará traslado a la sociedad hasta por diez días al cabo de los cuales deberá tomarse la decisión respectiva. Para tal fin la Superintendencia podrá convocar la asamblea o junta de socios u ordenar su convocatoria.

5. La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irregularidades o violaciones legales o estatutarias. Para tal efecto, las personas interesadas deberán hacer una relación de los hechos lesivos de la ley o de los estatutos y de los elementos de juicio que tiendan a comprobarlos. La Superintendencia adelantará la respectiva investigación y de acuerdo con los resultados, decretará las medidas pertinentes según las facultades asignadas en esta ley.

PARAGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio, la Superintendencia de Sociedades podrá, de oficio o a solicitud de parte, reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio, en relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de otra Superintendencia.

Artículo 89. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

Los recursos necesarios para cubrir los gastos que ocasione el funcionamiento de la Superintendencia de Sociedades, se proveerán mediante contribución a cargo de las sociedades sometidas a su vigilancia o control.

Tal contribución consistirá en una tarifa que se calculará sobre el monto total de los activos, incluidos los ajustes integrales por inflación, que registre la sociedad a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Dicha contribución se liquidará conforme a las siguientes reglas:

1. Se determinará el monto total del presupuesto de funcionamiento que demande la Superintendencia en el período anual respectivo.

2. El total de las contribuciones correspondiente al monto del presupuesto de funcionamiento de la Superintendencia.

3. Con base en el total de activos de las sociedades vigiladas y controladas al final del período anual anterior, el Superintendente de

Sociedades mediante resolución establecerá la tarifa de contribución a cobrar, que podrá ser diferente según se trate de sociedades activas, en período preoperativo, en concordato o en liquidación. La tarifa que se fije no podrá ser superior al uno por mil de los activos mencionados.

4. Cuando la sociedad no hubiere estado vigilada o controlada durante todo el período, la contribución a cobrarse, se establecerá en proporción al lapso de vigilancia o control correspondiente. En ningún caso, la contribución a cobrar a cada sociedad podrá exceder del uno por ciento del total de las contribuciones.

5. Las contribuciones se liquidarán por cada sociedad anualmente con base en el total de sus activos multiplicados por la tarifa que fije la Superintendencia de Sociedades para el período fiscal correspondiente.

6. Cuando una sociedad no suministre oportunamente los balances cortados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o no liquide la contribución respectiva, la Superintendencia, teniendo en cuenta el total de activos que figure en el último balance que repose en los archivos de la entidad, hará la correspondiente liquidación.

7. Cuando una sociedad presente saldos a favor de períodos anteriores, éstos podrán ser aplicados para ser deducidos del pago de la vigencia fiscal que esté en curso.

8. Todo reintegro por concepto de contribuciones será tramitado de acuerdo con las normas que para tal fin fije la Tesorería General de la Nación.

La Superintendencia de Sociedades podrá cobrar a las sociedades no vigiladas ni controladas o a otras entidades o personas, por los servicios que les preste, según sean los costos que cada servicio implique para la entidad.

Las sumas por concepto de contribuciones o por prestación de servicios que no se cancelen en los plazos fijados por la Superintendencia, causarán los mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios.

TITULO II

REGIMEN DE PROCESOS CONCURSALES

CAPITULO I

GENERALIDADES

Artículo 90. MODALIDADES DEL TRÁMITE CONCURSAL.

El trámite concursal podrá consistir en:

1. Un concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, o
2. Un concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patrimonio del deudor.

Artículo 91. COMPETENCIA.

La Superintendencia de Sociedades será competente de manera privativa para conocer del trámite concursal de las sociedades comerciales y de las empresas unipersonales, así como el de

las sucursales de sociedades extranjeras, siempre y cuando no estén sujetas a un régimen especial de liquidación o intervención. Por consiguiente, para los efectos pertinentes, se le atribuyen funciones jurisdiccionales de conformidad con el inciso 3o. del artículo 116 de la Constitución Política.

Los jueces civiles del circuito especializados y en su defecto, los jueces civiles del circuito, serán competentes para conocer de los procesos concursales de las demás personas jurídicas y de personas naturales, que no estén sometidas a un régimen especial.

Artículo 92. SUPUESTOS.

La autoridad competente deberá estudiar y resolver si hay lugar a la apertura de un trámite concursal cuando el deudor, persona jurídica o natural, se encuentre en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Incumpliendo el pago regular de sus obligaciones de contenido patrimonial;
2. En graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de las mencionadas obligaciones;
3. Si se teme razonablemente que llegue a cualquiera de las dos situaciones anteriores.

Artículo 93. INFORMACION PRELIMINAR.

La Superintendencia de Sociedades estudiará si es procedente la apertura del trámite concursal cuando en desarrollo de las funciones de inspección, vigilancia y control que ejerce, encuentre que existen circunstancias que exijan la adopción de tal medida.

Así mismo, estudiará si es procedente la apertura del trámite concursal cuando se lo solicite cualquier persona con interés jurídico.

Las demás entidades del Estado están obligadas a informar a la Superintendencia de Sociedades la existencia de circunstancias que exijan la adopción de tales medidas.

Cuando el deudor se encuentre incumpliendo el pago regular de sus obligaciones de contenido patrimonial, deberá informarlo a la autoridad competente, a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de los hechos.

Artículo 94. VERIFICACION DE LA SITUACION.

Cuando lo considere necesario, antes de proceder a decretar la apertura del trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades podrá practicar dentro de los diez días siguientes una inspección a la entidad deudora, con el fin de establecer:

- a. Las obligaciones patrimoniales a su cargo;
- b. La existencia y cuantía de los procesos en su contra;
- c. La situación jurídica, contable, económica y administrativa;
- d. El cumplimiento de su objeto, en los términos del contrato social;

e. Las apropiaciones para las reservas obligatorias;

f. La ocurrencia de pérdidas que generen la disolución de la sociedad;

g. Cualquier otro aspecto que en el curso de la diligencia resulte conveniente investigar, y si fuere del caso, podrán obtener los documentos necesarios para la apertura del trámite e interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera, con el fin de establecer los hechos de que tratan los literales anteriores. El informe de los funcionarios comisionados, y las copias de los documentos que lo soporten, formarán parte del expediente.

Recibido dicho informe, la Superintendencia resolverá sobre la situación dentro de los diez días siguientes, ordenando al deudor la presentación de planes tendientes a mejorar su situación, cuya ejecución será vigilada por la Superintendencia de Sociedades, o decretando la apertura del trámite concursal correspondiente.

Artículo 95. APERTURA DEL TRÁMITE.

La Superintendencia de Sociedades abrirá el trámite concursal, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando de la información recibida sea evidente que se debe abrir el trámite concursal sin dilación alguna.

2. Cuando no se adopten las medidas correctivas a que se refiere el artículo anterior, o cuando a pesar de su adopción, no se consiga la solución de los eventos que imponen la apertura del proceso.

3. Cuando la situación de incumplimiento en el pago regular de sus obligaciones de contenido patrimonial, se haya extendido por seis meses o más.

4. Cuando el deudor o su casa matriz hayan sido admitidos a concordato en el exterior.

Artículo 96. RECURSOS.

Contra la providencia que ordene la apertura del trámite concursal no procederá recurso alguno; la que la niegue, sólo será susceptible del recurso de reposición.

Artículo 97. OBJETO DEL CONCORDATO.

El concordato tendrá por objeto la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito.

En procura de los anteriores objetivos, sus estipulaciones podrán adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas:

1. La vigilancia permanente de su administración;
2. La administración del patrimonio y de los negocios de la empresa por una sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria;

3. La constitución de una sociedad en la cual participen los acreedores como socios, que se haga cargo de todo o parte de la actividad empresarial;

4. El aumento del capital social y la conversión de créditos a cargo de la sociedad en partes de interés, cuotas o acciones, en la cantidad en que dicho aumento no sea cubierto por los socios;

5. La transformación o la fusión con otra u otras compañías;

6. La amortización gradual de todos los créditos con base en las disponibilidades actuales o futuras del deudor;

7. La cesión parcial o total de las partes de interés, cuotas o acciones en que esté distribuido el capital social;

8. La dación en pago o la transferencia de bienes a los acreedores para extinguir total o parcialmente las deudas;

9. La venta, permuta, arrendamiento o enajenación a cualquier título de elementos del activo, o de uno o más de los establecimientos de comercio;

10. La venta de maquinaria o equipo obsoleto;

11. La cesación de determinadas actividades o el desarrollo de otras nuevas;

12. La aprobación de planes de refinanciación;

13. El cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al crédito de fomento o beneficios especiales establecidos para la defensa o recuperación de empresas en crítica situación económica; y

14. Cualesquiera otras que resulten útiles para los fines indicados en el primer inciso de este artículo.

PARAGRAFO. En los casos previstos en los numerales 3, 4, 5 y 7, los acreedores que no ingresen a la sociedad deberán aceptar el pago de sus créditos, conforme se disponga en el acuerdo concordatario.

Artículo 98. OBJETO DE LA LIQUIDACION OBLIGATORIA.

Mediante la liquidación obligatoria se realizarán los bienes del deudor, para atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo.

CAPITULO II

DEL CONCORDATO

SECCION I

REQUISITOS GENERALES

Artículo 99. REQUISITOS SUSTANCIALES.

Cuando el deudor solicite la apertura del concordato, deberá reunir los siguientes requisitos:

1. No estar sujeto al régimen de liquidación forzosa, ni a otro especial.

2. Haber obtenido autorización del máximo órgano social, salvo que los estatutos dispongan otra cosa.

Artículo 100. REQUISITOS FORMALES.

Cuando la solicitud sea presentada por el deudor o por su apoderado, deberá contener la fórmula de arreglo con sus acreedores y una memoria explicativa de las causas que lo llevaron a su situación de crisis.

A la solicitud deberán acompañarse los siguientes anexos:

1. Documento que acredite la existencia, representación legal y domicilio.

2. Los estados financieros debidamente certificados, correspondientes a los tres últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren.

3. Un Estado de Inventario cortado dentro del mes anterior a su presentación, en el cual, previa comprobación de su existencia se detallen y valoren sus activos y pasivos, con indicación precisa de su composición y de los métodos para su valuación. En dicho estado o en sus notas, se detallará por lo menos:

a. La ubicación, discriminación y gravamen que soportan sus bienes. Tratándose de bienes cuya enajenación o gravamen se encuentre sujeto a registro, se expresarán los datos que de acuerdo con la ley sean necesarios para que éste proceda;

b. Una relación completa y actualizada de los acreedores, con indicación del nombre, domicilio y dirección de cada uno, cuantía y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fechas de origen y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de ignorar los mencionados lugares, el deudor deberá manifestarlo expresamente;

c. Con respecto a las obligaciones tributarias, una discriminación por clase de impuestos, identificando su cuantía, forma de pago, intereses, sanciones y las declaraciones tributarias correspondientes. Así mismo, una relación de todas las actuaciones administrativas y procesos de jurisdicción coactiva que estén en curso;

d. Con respecto a los pasivos laborales, una relación de los trabajadores del deudor, indicando el cargo que desempeñen; del personal jubilado a su cargo y de los extrabajadores a quienes se adeude sumas de carácter laboral, especificando el monto individual actualizado de cada acreencia.

En caso de que existieren sindicatos, además de informar tal circunstancia, se señalará el nombre de sus representantes.

4. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor, o que cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde se encuentren radicados y el estado en que se hallen;

5. Una relación de los procesos concursales que se hubieren adelantado respecto del deudor;

PARAGRAFO PRIMERO. La memoria de que trata este artículo, así como los anexos indicados en los numerales 2 a 5, deberán ser suscritos por el deudor o su apoderado, bajo juramento que se entenderá rendido con su presentación. El estado de inventario deberá ser suscrito también por el contador público que lo hubiere preparado.

Cuando el Superintendente de Sociedades observe que se ha podido cometer alguna infracción, deberá enviar copia de lo pertinente al funcionario que conforme a la ley deba adelantar la investigación, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

PARAGRAFO SEGUNDO. Cuando la solicitud no reúna los documentos o informaciones indicados en este artículo o el concordato hubiere sido abierto de oficio o a petición de un acreedor, se señalará un plazo no mayor de diez días para que se presenten dichos documentos o informaciones.

PARAGRAFO TERCERO. Los acreedores relacionados por el deudor, por ese solo hecho se considerarán reconocidos en la cuantía indicada, sin perjuicio de las objeciones que puedan formularse. En todo caso, el acreedor podrá solicitar un mayor valor, caso en el cual deberá acompañar la prueba correspondiente a la diferencia entre el valor relacionado por el deudor y el solicitado por él.

SECCION II

DEL TRAMITE

Artículo 101. CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA DE APERTURA.

La Superintendencia de Sociedades en la providencia que ordene la apertura del trámite del concordato deberá:

1. Designar un contralor, con su respectivo suplente, de los bienes, haberes y negocios del deudor.

2. Designar una junta provisional de acreedores, con sus respectivos suplentes personales, integrada así:

a. Un representante de las entidades públicas acreedoras;

b. Un representante de los trabajadores;

c. Un representante de las entidades financieras;

d. Un representante de los acreedores con garantía real, que no sean entidades financieras;

e. Un representante de los acreedores quirografarios, que no sean entidades financieras.

f. El representante de los tenedores de bonos, si los hay.

g. La sociedad administradora de los patrimonios autónomos generados mediante la titularización de los activos del deudor, si los hay.

En caso de que no exista alguna de las categorías de acreedores a que se refieren los literales a, b, c, d y e, la designación podrá recaer en un miembro de cualquiera otra.

Tales representantes serán escogidos de la relación de acreedores que el deudor presente. Los acreedores determinarán la persona que en su nombre llevarán la representación, quien no necesariamente debe ser abogado.

3. Prevenir al deudor que, sin su autorización, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni reformas estatutarias cuando se trate de personas jurídicas.

Los actos que se ejecuten en contravención a lo previsto en este ordinal, serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial y darán lugar a que la Superintendencia de Sociedades imponga al acreedor o al deudor, según el caso, multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales, hasta tanto se reverse la operación respectiva.

La Superintendencia de Sociedades decidirá de plano sobre las solicitudes de autorización previstas en este ordinal, mediante providencia que sólo tendrá recurso de reposición, el cual no suspenderá el trámite del concordato;

4. Ordenar la notificación a los acreedores, mediante emplazamiento por medio de un edicto que se fijará al día siguiente de proferida la providencia de apertura, por el término de diez días, en la Superintendencia de Sociedades.

Durante el término de fijación del edicto, éste se publicará a costa del deudor o de cualquier acreedor en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal del deudor si lo hubiere; y será radiodifundido en una emisora que tenga sintonía en dicho domicilio.

5. Comunicar de inmediato la apertura del concordato a los acreedores relacionados en la solicitud y a las entidades públicas de las cuales pueda ser deudor de impuestos, tasas o contribuciones, indicándoles el término que tienen para hacerse parte.

Cuando se trate de acreedores fiscales, dicha comunicación se hará por oficio, acompañando la relación que para el efecto presentó el deudor.

No obstante lo previsto en este numeral, para que se entienda notificada la providencia de apertura del proceso bastarán el edicto y las publicaciones de que trata el numeral anterior.

6. Ordenar de inmediato a la Cámara de Comercio la inscripción de la providencia de apertura en el registro mercantil o en la oficina correspondiente del domicilio principal del deudor y demás lugares donde tenga sucursales, agencias o establecimientos de comercio, las cuales, en adelante, deberán anunciarse siempre con la expresión "en concordato".

A partir de la inscripción, todo pago o extinción de obligaciones concordatarias se sujetará a las reglas establecidas en esta ley.

7. Decretar el embargo de los activos del deudor cuya enajenación esté sujeta a registro, declarados en la relación de activos, y librar de inmediato los oficios a las correspondientes oficinas para su inscripción. Si en ellas aparece algún embargo registrado sobre tales bienes o derechos, éste será cancelado y de inmediato se inscribirá el ordenado por la Superintendencia de Sociedades y se dará aviso a los funcionarios correspondientes.

PARAGRAFO. La providencia de apertura deberá notificarse al deudor personalmente, en la forma prevista por el Código de Procedimiento Civil, lo cual no impide que se ejecuten de inmediato las medidas adoptadas en ella.

SECCION III

EFFECTOS DE LA APERTURA DEL CONCORDATO

Artículo 102. PREFERENCIA DEL CONCORDATO.

A partir de la providencia de apertura y durante el término de ejecución del acuerdo concordatario, no podrá admitirse petición en igual sentido.

La Superintendencia de Sociedades librára oficio a los Jueces y funcionarios administrativos competentes para conocer de procesos judiciales o de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial contra el deudor, para que le informen la naturaleza y estado de la actuación, en la forma y con el detalle que ella indique.

Tratándose de procesos ejecutivos o de ejecución coactiva, dentro de los tres días siguientes al recibo del oficio, el Juez o funcionario ordenará remitir el expediente a la Superintendencia de Sociedades. Una vez ordenada la remisión, se procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene.

El Juez o funcionario declarará de plano la nulidad de las actuaciones que se surtan en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no tendrá recurso alguno.

El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores incurrirá en causal de mala conducta, salvo que pruebe causa justificativa.

Los procesos, demandas ejecutivas y los de ejecución coactiva, se tendrán por incorporados al concordato y estarán sujetos a la suerte de aquél. Los créditos que en ellos se cobren se tendrán por presentados oportunamente, siempre y cuando tal incorporación se surta antes del traslado de créditos.

Cuando se remita un proceso ejecutivo en el que no se hubieren decidido de manera definitiva las excepciones de mérito propuestas, éstas se considerarán objeciones, y serán decididas como tales. Las pruebas recaudadas en el proceso remitido serán apreciadas en el trámite de la objeción.

Si en los referidos procesos se hubieren propuesto como excepciones de mérito las de nuli-

dad relativa, simulación o lesión enorme, el Juez remitirá copia del expediente, conservando el original para resolver las referidas excepciones y cualquier otra que se hubiere propuesto junto con éstas.

Artículo 103. CONTINUACION DE LOS PROCESOS EJECUTIVOS EN DONDE EXISTEN OTROS DEMANDADOS.

En los procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y sus codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, el Juez dentro de los tres días siguientes al recibo del oficio de solicitud de envío de expedientes, mediante auto lo pondrá en conocimiento del demandante, a fin de que en el término de su ejecutoria manifieste si prescinde de cobrar su crédito a cargo de los demás demandados, evento en el cual, se procederá como se dispone en el artículo anterior.

Si el demandante no prescindiere de la actuación contra los otros deudores, deberá hacerse parte al igual que los demás acreedores, indicando el estado actual del proceso y las circunstancias a que hubiere lugar, para lo cual deberá acompañar la certificación de la existencia y estado del proceso, así como copia de los títulos base de la ejecución. No obstante, cuando el solicitante no hubiere obtenido dichos documentos, así lo manifestará bajo la gravedad de juramento, en cuyo caso, la Superintendencia de Sociedades oficiará al Juez respectivo para que los expida y remita. Los procesos ejecutivos en cuestión, continuarán respecto de los otros deudores.

En el evento que al acreedor demandante se le satisfaga su acreencia o se le efectúen abonos, por parte de los deudores, respecto de los cuales continúa la ejecución, deberá denunciar tal circunstancia a la Superintendencia de Sociedades.

Una vez aprobado el acuerdo concordatario, deberá informar de ello al Juez que conoce del proceso ejecutivo, el cual decretará la terminación del mismo, a menos que haya hecho la reserva especial de la solidaridad, de que trata el artículo 1573 del Código Civil.

En caso de continuación del proceso ejecutivo, no se podrán practicar medidas cautelares sobre bienes del deudor y las que se hubieren practicado, quedarán a ordenes de la Superintendencia de Sociedades y se aplicarán las disposiciones sobre medidas cautelares, contenidas en esta ley.

Artículo 104. OBLIGACIONES DIFERENTES AL PAGO DE SUMA DE DINERO.

Si la obligación fuere de hacer o de dar una cosa, el acreedor deberá estimarla en dinero o solicitar su cumplimiento.

Artículo 105. INTERRUPCION DEL TERMINO DE PRESCRIPCIONE INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD.

Desde la apertura del concordato y hasta la terminación del mismo o la declaratoria de

cumplimiento o incumplimiento del acuerdo concordatario, se interrumpe el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren perfeccionado o hechos exigibles antes de la iniciación del concordato.

Artículo 106. CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO.

Se tendrá por no escrita la cláusula en la que se pacte la admisión a concordato, como causal de terminación de los contratos de tracto sucesivo.

Artículo 107. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.

Las personas o sociedades que presten servicios públicos domiciliarios o industriales al deudor, admitido o convocado a concordato, no podrán suspender la prestación de aquéllos por causa de tener créditos insolutos a su favor. Si la prestación estuviere suspendida, estarán obligadas a restablecerla, so pena de responder por los perjuicios que se ocasionen. El valor de los nuevos servicios que se presten a partir de la apertura del concordato, se pagarán como obligaciones post-concordatarias.

PARAGRAFO. Igual regulación se aplicará a las entidades de previsión social en relación con las obligaciones que tengan con trabajadores del deudor.

Artículo 108. CANCELACION Y RESTABLECIMIENTO DE GRAVAMENES.

Si el contralor recomienda el levantamiento o la modificación de los gravámenes que recaen sobre bienes del deudor y una vez oídos el deudor, la junta provisional y el acreedor titular del respectivo gravamen, la Superintendencia resolverá mediante providencia motivada, la adopción de tal medida, la cual procederá cuando considere que la misma es indispensable para evitar un mayor deterioro de la situación del deudor. No obstante lo dispuesto, el acreedor titular del gravamen, conservará el privilegio y la preferencia para el pago de su crédito y tendrá derecho al restablecimiento del gravamen en los casos previstos en esta ley.

SECCION IV CONTRALOR

Artículo 109. DESIGNACION.

Para efectos de la designación y nombramiento del contralor, la Superintendencia de Sociedades elaborará y mantendrá actualizada una lista de profesionales con experiencia acreditada en el manejo de empresas o negocios. Cualquier persona interesada podrá solicitar su inclusión en dicha lista para lo cual deberá demostrar el cumplimiento de los requisitos que establezca la Superintendencia.

Hecha la designación, la Superintendencia de Sociedades la comunicará de inmediato, para que dentro de los cinco días siguientes manifieste si acepta el cargo, so pena de ser reemplazados.

La Cámara de Comercio o la oficina correspondiente registrará el nombramiento del

contralor y su suplente, cuando se le presente copia de la providencia de designación y de la comunicación de aceptación del cargo.

PARAGRAFO. Las personas jurídicas debidamente constituidas, cuyo objeto contemple la asesoría para la recuperación de empresas, podrán ser nombradas como contralores. En todo caso, deberán designar la persona o personas naturales que en su nombre ejecutarán el encargo.

Artículo 110. INHABILIDADES.

No podrá ser designado como contralor:

1. Quien se encuentre desempeñando el cargo en tres concordatos, salvo que sea persona jurídica.

2. Quien sea asociado o empleado del deudor o deudora, de su matriz o de alguna de sus subordinadas.

3. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, con el deudor, los administradores, revisor fiscal, asociados y funcionarios directivos de la entidad deudora.

4. Quien desempeñe en la entidad deudora, en su matriz o en sus subordinadas, el cargo de gerente, administrador, revisor fiscal, representante legal o cualquier otro de dirección, o que los hubiere desempeñado dentro de los cinco años anteriores a la admisión o convocatoria.

5. Cuando el contralor designado se encuentre en alguna de las situaciones indicadas en los numerales anteriores en relación con una o más de las entidades acreedoras, igualmente se encontrará inhabilitado.

Artículo 111. FUNCIONES.

El contralor es un auxiliar de la justicia a quien le corresponde analizar el estado patrimonial del deudor y los negocios que hubiere realizado dentro de los últimos tres años, evaluar la fórmula de arreglo presentada con la solicitud de concordato y conceptuar sobre la viabilidad de la misma. Para tal efecto tendrá las siguientes facultades:

1. Examinar los bienes, libros y papeles del deudor.

2. Comprobar la realidad de los recaudos y erogaciones del deudor ocurridos durante el lapso antes indicado.

3. Rendir dentro de los veinte días siguientes a su aceptación un informe preliminar a la Superintendencia de Sociedades y a la junta provisional de acreedores, sobre la situación contable, económica y financiera del deudor, así como sobre la viabilidad de la fórmula de arreglo presentada por él. También podrá recomendar el levantamiento de medidas cautelares o gravámenes.

4. Rendir informes mensuales a la Superintendencia de Sociedades y a la junta provisional de acreedores sobre la situación de la compañía y las fórmulas de arreglo en discusión.

5. Comunicar a la Superintendencia de Sociedades para los efectos a que haya lugar, la ocurrencia de alguna de las causales previstas en la ley para que proceda la remoción de los administradores, cuando en desarrollo de su labor compruebe dicha circunstancia.

6. Convocar cuando lo estime conveniente a la junta provisional de acreedores.

Artículo 112. REMOCION DEL CONTRALOR Y HONORARIOS.

La Superintendencia de Sociedades podrá remover al contralor, de oficio o a petición del deudor o de la junta provisional de acreedores, siempre que exista causa comprobada que lo justifique.

Los honorarios provisionales del contralor serán señalados por la Superintendencia de Sociedades en la providencia que lo designe, con sujeción a las tarifas que ella elabore. La junta provisional de acreedores podrá modificar dichos honorarios, teniendo en cuenta tales tarifas, oído previamente el deudor.

La no aceptación del contralor sin causa justificada o su remoción, dará lugar a que la Superintendencia de Sociedades cancele su inscripción.

Artículo 113. PRESCINDENCIA DEL CONTRALOR.

Los acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las acreencias presentadas al concordato o de las reconocidas en el auto de calificación y graduación de créditos, podrán solicitar a la Superintendencia de Sociedades que el concordato se adelante sin contralor.

SECCION V

JUNTA PROVISIONAL DE ACREEDORES

Artículo 114. INSTALACION.

La junta provisional de acreedores deberá ser instalada por la Superintendencia de Sociedades, en el domicilio principal del deudor, dentro del mes siguiente a la integración de la misma.

Artículo 115. FUNCIONAMIENTO.

La junta elegirá un presidente que será escogido de entre sus miembros y un secretario. Todas las decisiones se adoptarán por mayoría de votos. De las reuniones se levantarán actas suscritas por el Presidente o el Secretario, las cuales se harán constar en un libro de actas. Copia de las mismas deberá enviarse por el Secretario a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los cinco días siguientes a cada sesión.

Artículo 116. CAUSALES DE REMOCION.

Habrá lugar a la remoción de los miembros de la junta provisional, cuando lo soliciten acreedores que representen no menos del cincuenta por ciento (50%) de las acreencias de la misma categoría, o por inasistencia a tres sesiones.

Artículo 117. REEMPLAZO.

En los casos señalados en el artículo anterior y en el de remoción, renuncia o falta absoluta, la

Superintendencia de Sociedades designará el reemplazo entre los miembros de la misma categoría; si no existiere ninguno, la designación podrá recaer en un miembro de cualquier otra.

Artículo 118. FUNCIONES.

La junta provisional de acreedores tiene como función primordial la de elaborar un proyecto de acuerdo concordatario viable. Para tal efecto estudiará la fórmula sugerida por el deudor y procederá a modificarla o reemplazarla por otra, si fuere del caso.

Para el cumplimiento de su cometido podrá ejercer las siguientes facultades:

1. Solicitar en forma verbal o escrita informes en lo de su competencia, al deudor, a sus administradores, al contralor, al revisor fiscal o a cualquiera de los acreedores.

2. Examinar los bienes, libros y papeles del deudor.

3. Solicitar al deudor la adopción de concretas medidas que considere indispensables para evitar la extensión de la situación de crisis o el deterioro de su patrimonio, pudiendo en caso de que el deudor no las adopte o realice sin justa causa, solicitar a la Superintendencia la remoción del administrador.

4. Solicitar en los casos previstos en la ley la remoción de los administradores de la deudora, del contralor o del revisor fiscal.

5. Solicitar que se convoque a la asamblea de acreedores, cuando haya lugar a ello.

6. Designar al revisor fiscal, en los casos previstos en la ley.

7. Citar a los administradores por lo menos con dos días de antelación, indicando los puntos que se vayan a tratar y sobre los cuales deban rendir informes escritos o verbales.

8. Designar, cuando lo estime conveniente, un coadministrador de los bienes, haberes y negocios del deudor, determinar sus facultades y fijarle remuneración;

9. Las demás que le asignen otras normas de este estatuto.

SECCION VI

ORGANOS SOCIALES DE LA ENTIDAD DEUDORA

Artículo 119. CONTINUIDAD.

Los órganos sociales continuarán funcionando, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al contralor, a la junta provisional de acreedores y al representante legal.

Artículo 120. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Si debidamente convocado el máximo órgano social con el fin de someter a su consideración los estados financieros de fin de ejercicio, no pudiere llevarse a cabo la reunión, dentro de los cinco días siguientes se convocará a una segunda, la que se celebrará dentro de los cinco días siguientes a la convocatoria. Si en esta segunda reunión no hubiere quórum, se entenderán aprobados los estados financieros.

Artículo 121. DESIGNACION DE ADMINISTRADORES O REVISOR FISCAL.

Si convocados los órganos sociales para el nombramiento de administradores o revisor fiscal, no fuere posible llevar a cabo la reunión o la designación, se convocará dentro de los cinco días siguientes a una segunda reunión que se realizará dentro de los diez días siguientes a la convocatoria. Si en esta segunda reunión no hubiere quórum o no se realiza el nombramiento, la Superintendencia de Sociedades procederá a designar los administradores. El revisor fiscal será designado por la Junta Provisional de acreedores.

Artículo 122. CAUSALES DE REMOCION DE LOS ADMINISTRADORES.

La Superintendencia de Sociedades, de oficio o por información del contralor o a petición de la Junta Provisional de Acreedores, ordenará la remoción del o de los administradores en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Cuando por su negligencia la sociedad no esté cumpliendo los deberes de comerciante.

2. Cuando estén inhabilitados para ejercer la función o el comercio.

3. Cuando sin justa causa no cumplan las obligaciones que les impone esta ley.

4. Cuando no denunciaron oportunamente la situación que impone la apertura del trámite concursal, o habiéndolo hecho, no se aportaron los documentos necesarios.

5. Cuando, debidamente citados, dejen de asistir a las reuniones de la Junta Provisional de Acreedores, sin justa causa.

6. Cuando no cumplan las órdenes impartidas por la Superintendencia de Sociedades.

7. Cuando hagan enajenaciones, pagos, arreglos relacionados con sus obligaciones o reformas estatutarias, sin autorización de la Superintendencia de Sociedades.

8. Cuando sin justa causa no adopten las medidas que les hubiere solicitado la junta provisional de acreedores.

9. En los demás casos previstos en la ley.

Artículo 123. REMOCION DEL REVISOR FISCAL.

La Superintendencia de Sociedades de oficio o a solicitud de la junta provisional de acreedores o del contralor, podrá remover al revisor fiscal, cuando compruebe que no denunció oportunamente la situación de crisis del deudor, o cuando no estando la empresa en marcha, hubiere omitido exigir que así se revelara en los estados financieros, o cuando se hubiere abstenido de solicitar la adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes de la sociedad o de los que tuviere en custodia o a cualquier otro título.

Artículo 124. TRAMITE DE LA REMOCION.

Recibida la solicitud de remoción, la misma será resuelta de plano por la Superintendencia de Sociedades a más tardar dentro de los cinco

días siguientes a aquélla. En la providencia en que ordene la remoción, se convocará al órgano social encargado de efectuar la designación, para que proceda a nombrar a quien haya de reemplazarlo y si es del caso, se aplicará el artículo precedente. Contra la providencia que ordene la remoción procederá el recurso de reposición.

La solicitud de remoción y su trámite no suspenderán el curso del concordato.

SECCION VII

PRESENTACION DE CREDITOS

Artículo 125. TERMINO PARA HACERSE PARTE.

A partir de la providencia de admisión o convocatoria y hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los acreedores deberán hacerse parte personalmente o por medio de apoderado presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de su crédito.

Los acreedores con garantía real conservan la preferencia y el orden de prelación para el pago de sus créditos, pero deberán hacerlos valer dentro del concordato. Si dentro del término para formular objeciones se presentare desacuerdo entre aquéllos y el deudor o los demás acreedores, respecto del valor del bien objeto de la garantía, la Superintendencia de Sociedades decretará un dictamen de peritos escogidos de la lista de expertos que haya elaborado la Cámara de Comercio con jurisdicción en los lugares donde estén situados los bienes. Este dictamen no será objetable, pero si la Superintendencia considera que no reúne los requisitos legales o no está suficientemente fundado, designará nuevos peritos y rendido su dictamen fijará el precio que corresponda.

PARAGRAFO. Los acreedores titulares de obligaciones condicionales o sujetas a litigio, igualmente deberán hacerse parte dentro de la oportunidad definida en el presente artículo, a fin de que en el concordato se atiendan las resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia o laudo respectivo. En todo caso estos acreedores quedarán sujetos a los términos previstos en el acuerdo concordatario.

Los pagos correspondientes a estos acreedores únicamente se efectuarán, cuando la obligación tenga el carácter de exigible. En el entretanto con los fondos respectivos se constituirá una fiducia, cuyos rendimientos pertenecerán al deudor.

Artículo 126. CREDITOS LABORALES.

Los créditos por salarios, mesadas pensionales y aportes para seguridad social, causados y exigibles a la fecha de admisión o convocatoria a concordato, deberán pagarse como obligaciones post-concordatarias, y en consecuencia para cobrar su valor, los trabajadores no necesitarán hacerse parte en el concordato.

Los créditos por prestaciones sociales causados y no exigibles a la fecha de admisión o convocatoria, relacionados por el deudor en los

anexos de la solicitud de concordato, o cuando se le solicite tal información, se considerarán presentados oportunamente, sin perjuicio de que puedan hacerse parte como los demás acreedores, directamente o por medio de apoderado.

Artículo 127. CREDITOS FISCALES Y PARAFISCALES.

Los créditos fiscales y parafiscales relacionados por el deudor en los anexos de la solicitud de concordato, por ese solo hecho se considerarán presentados oportunamente.

No obstante, cuando los valores relacionados no incluyan la totalidad de los rubros o conceptos adeudados, la entidad respectiva deberá formular solicitud de reconocimiento a más tardar antes del vencimiento del término para la presentación de objeciones. De dicha solicitud se dará traslado en el mismo término previsto para el traslado de objeciones. En todo caso, los valores relacionados por el deudor y los comprendidos en la solicitud de reconocimiento, si ésta fue presentada en término, podrán ser actualizados en cualquier momento, antes de la audiencia preliminar.

Artículo 128. CREDITOS DE TERCEROS QUE PUEDAN PAGAR OBLIGACIONES DEL DEUDOR.

Los garantes, avalistas, emisores de cartas de crédito, fiadores, codeudores y los aseguradores que subroguen derechos de terceros contra el deudor, así como todos aquellos que paguen obligaciones del deudor, podrán solicitar a la Superintendencia de Sociedades que se reconozcan sus créditos, subrogándose hasta concurrencia del valor que se reconozca al respectivo acreedor en el concordato o del valor pagado si resultare inferior.

Artículo 129. ACREEDORES EXTEMPORANEOS.

Los acreedores con o sin garantía real que no concurren oportunamente, no podrán participar en las audiencias y para hacer efectivos sus créditos sólo podrán perseguir los bienes que le queden al deudor una vez cumplido el concordato, o cuando éste se incumpla, se declare terminado y se inicie el trámite de liquidación obligatoria, salvo que en audiencia preliminar o final, sean admitidos de conformidad con lo previsto en esta ley.

Artículo 130. TRASLADO DE LOS CREDITOS PRESENTADOS.

Vencido el término que tienen los acreedores para hacerse parte, se dará traslado común por el término de cinco días, mediante providencia que no tendrá recurso, de los créditos presentados, para que el deudor o cualquiera de los acreedores puedan objetarlos, acompañando las pruebas que tuvieren en su poder y soliciten las demás que pretendan hacer valer.

El deudor sólo podrá objetar las obligaciones por él relacionadas, cuando los acreedores reclamen créditos de cuantía superior o de naturaleza diferente.

De las objeciones formuladas se dará traslado a las partes por el término de cinco días, a fin

de que se pronuncien acerca de los hechos materia de la objeción y pidan pruebas.

**SECCION VIII
REGLAS GENERALES
DE LAS AUDIENCIAS**

Artículo 131. NOTIFICACION.

La providencia que señale fecha y hora para cualquier audiencia, deberá publicarse por una sola vez en un periódico de circulación nacional y en otro del domicilio del deudor, si lo hubiere; y deberá radiodifundirse en una emisora que tenga sintonía en dicho domicilio, por el deudor, el contralor o cualquier acreedor. Las publicaciones y la radiodifusión se realizarán con una antelación no inferior a cinco días a la fecha señalada para dar inicio a la audiencia y acreditarlas por lo menos tres días antes de aquél en que deba llevarse a cabo.

PARAGRAFO. La Superintendencia de Sociedades rechazará de plano cualquier solicitud de nulidad presentada antes de la audiencia o en el curso de la misma o formulación de recurso, encaminada a hacer valer cualquier irregularidad en la publicación o radiodifusión, siempre que a la audiencia hubiere concurrido además del deudor, un número de acreedores que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los créditos presentados.

Artículo 132. SUSPENSION.

Las deliberaciones se efectuarán en una sola audiencia que podrá suspenderse mediante providencia hasta por dos veces, la cual se reanudará al quinto día siguiente, sin nueva convocatoria, de oficio por la Superintendencia de Sociedades o a petición de acreedores que representen no menos del cincuenta por ciento (50%) de las acreencias presentes en la audiencia. No obstante, se podrá suspender por una tercera vez, cuando lo solicite uno o varios acreedores que representen un porcentaje no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del valor de las acreencias presentes en la audiencia, mediante providencia que se notificará en estrados y no tendrá recurso alguno, audiencia que deberá reanudarse al quinto día siguiente.

Artículo 133. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA.

Si a la primera reunión no concurriere uno o más acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los créditos reconocidos o no pagados, según se trate de audiencia final o de incumplimiento, se convocará a una segunda reunión para el quinto día siguiente, en la cual se decidirá con el voto del deudor y de uno o más acreedores que representen no menos del sesenta por ciento (60%) del valor de los créditos reconocidos y no pagados.

Si la segunda reunión no se efectúa por falta del quórum indicado en el artículo anterior, la Superintendencia de Sociedades declarará terminado el concordato y en consecuencia se iniciará el trámite de liquidación obligatoria.

Si la audiencia se efectúa pero no fuere posible celebrar el acuerdo concordatario por falta de los votos necesarios, la Superintendencia

de Sociedades mediante providencia que no tendrá recurso, la suspenderá y dispondrá reanudarla al quinto día siguiente. Si reanudada la reunión tampoco se consigue la mayoría decisoria, la Superintendencia procederá como se indica en el inciso anterior.

Artículo 134. PRESIDENCIA DE LAS AUDIENCIAS.

Las audiencias serán presididas por el Superintendente de Sociedades, quien podrá delegar tal función. Además de las atribuciones de la presente ley, el Superintendente o su delegado, tendrán el carácter de conciliadores y podrán proponer las fórmulas que estimen justas, sin que ello implique prejuzgamiento.

**SECCION IX
AUDIENCIAS**

Artículo 135. AUDIENCIA PRELIMINAR.

Sin perjuicio de las disposiciones generales y especiales, la audiencia preliminar se sujetará a las siguientes reglas:

1. Surtido el traslado de los créditos objeto de la audiencia, la Superintendencia de Sociedades mediante providencia señalará fecha para la audiencia, la que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes al vencimiento de aquél.

2. A la audiencia podrán concurrir el deudor y los acreedores que se hayan hecho parte, con el fin de verificar los créditos presentados, deliberar sobre las objeciones formuladas y conciliar las diferencias que se susciten acerca de éstas. Las objeciones que no fueren conciliadas serán resueltas en el auto de calificación y graduación de créditos. Si no fueren conciliadas todas las objeciones, la Superintendencia de Sociedades declarará terminada la audiencia, mediante providencia que no tendrá recurso.

3. Conciliadas todas las objeciones, el deudor y uno o más acreedores que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de los créditos oportunamente presentados, reconocidos y conciliados podrán admitir los créditos que se pretendan hacer valer extemporáneamente.

4. Surtidas las etapas anteriores, podrá celebrarse concordato entre el deudor y uno o más acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco (75%) del valor de los créditos reconocidos y admitidos.

La Superintendencia de Sociedades resolverá sobre la aprobación del concordato, en la misma audiencia. Una vez aprobado, pondrá fin al trámite y se aplicarán las disposiciones respectivas. Contra esta providencia sólo procede el recurso de reposición.

Artículo 136. AUDIENCIA FINAL.

Sin perjuicio de las reglas generales y especiales, la audiencia final se sujetará a las siguientes reglas:

1. Ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos, la Superintendencia de Sociedades, mediante providencia que no tendrá recurso, señalará fecha, hora y

lugar para la audiencia de deliberaciones finales, la cual se realizará dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de aquélla.

2. La audiencia tendrá por objeto la discusión y aprobación de fórmula concordataria, con el voto del deudor y uno o más acreedores que representen no menos del setenta y cinco por ciento del valor de los créditos reconocidos y admitidos.

3. Cuando a la audiencia no concurriere el empresario, su representante o apoderado, y no se presentare dentro de los tres días siguientes prueba siquiera sumaria que justifique la no comparecencia, el Superintendente citará a nueva reunión para continuar la audiencia, en la que podrá aprobarse el concordato con el solo voto de los acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los créditos reconocidos y admitidos.

Artículo 137. AUDIENCIA PARA MODIFICACION.

En cualquier época, a solicitud conjunta del deudor y cualquier número de acreedores que hayan intervenido en el trámite, de sus cesionarios o subrogatarios, que representen no menos del cincuenta por ciento (50%) de los créditos reconocidos, admitidos y aún no cancelados en el concordato, la Superintendencia de Sociedades deberá convocar a los acreedores a fin de que adopten las decisiones que sean necesarias para interpretar, modificar o facilitar el cumplimiento del concordato.

Las deliberaciones y decisiones se sujetarán al quórum y demás reglas prescritas en esta ley para la celebración del acuerdo. En caso que no se apruebe la modificación, por las partes o por la Superintendencia de Sociedades, continuará vigente el acuerdo anterior, con las consecuencias señaladas en la presente ley.

Artículo 138. AUDIENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

Si algún acreedor, el deudor, el administrador de la entidad deudora o quien demuestre interés jurídico denuncia el incumplimiento del concordato, la Superintendencia de Sociedades deberá investigar dicha situación, cuáles fueron sus causas, si hubo responsabilidad de sus administradores, y en caso afirmativo, les impondrá multas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales a cada uno.

Si la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a petición de cualquiera de las personas mencionadas en el inciso anterior, previo estudio financiero de la empresa, verifica que se ha incumplido el concordato, deberá convocar al deudor y a los acreedores cuyos créditos no hayan sido pagados en su totalidad, a audiencia para deliberar sobre la situación y adoptar decisiones que puedan resolverla. En caso contrario, declarará terminado el trámite del concordato y ordenará la apertura del trámite liquidatorio.

SECCION X

CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITOS

Artículo 139. PROVIDENCIA DE CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITOS.

Dentro de los quince días siguientes a la terminación de la audiencia preliminar, la Superintendencia de Sociedades calificará, graduará y determinará las bases para liquidar los créditos reconocidos y admitidos, de acuerdo con la relación presentada por el deudor y los demás elementos de juicio de que disponga y ordenará las contabilizaciones a que hubiere lugar.

Sin perjuicio de la facultad oficiosa para decretar pruebas, la Superintendencia de Sociedades ordenará la práctica de las que sean legales, conducentes, pertinentes y necesarias, mediante providencia que no tendrá recurso, los cuales se practicarán dentro de los diez días siguientes a su decreto. En caso contrario, las rechazará mediante providencia susceptible sólo del recurso de reposición. La Superintendencia de Sociedades podrá comisionar para la práctica de las pruebas decretadas, a los jueces civiles del circuito y municipales, o al Cónsul de Colombia en el exterior, conforme a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Civil, y en los tratados o convenios internacionales.

Cuando se remita un proceso ejecutivo en el que no se hubieren decidido las excepciones de mérito propuestas, éstas se considerarán objeciones, y serán decididas como tales. Las pruebas recaudadas en el proceso remitido, serán apreciadas en el trámite de la objeción.

En la misma providencia, impondrá a quienes se les haya rechazado la objeción contra algún crédito, por temeridad o mala fe, multa hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales.

Contra esta providencia procede únicamente el recurso de reposición, el cual deberá decidirse en el término de diez días.

PARAGRAFO. La Superintendencia de Sociedades decidirá las objeciones formuladas; cualquiera fuere el motivo en que ellas se funden, salvo las de nulidad relativa, simulación y lesión enorme, que sólo podrán ventilarse ante la justicia ordinaria, mediante demanda que deberá formularse ante el juez competente.

Artículo 140. TRATAMIENTO DE LOS CREDITOS MIENTRAS DECIDE LA JUSTICIA ORDINARIA.

Mientras la controversia a que hace referencia el párrafo del artículo precedente se decide por la justicia ordinaria, tales créditos se considerarán litigiosos y en consecuencia se les aplicará lo previsto en esta ley respecto de ellos.

SECCION XI

REQUISITOS. APROBACION Y EFECTOS DEL ACUERDO

Artículo 141. REQUISITOS.

Las estipulaciones del acuerdo concordatario deberán tener carácter general, en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y respetarán la prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la ley.

Todos los créditos estatales, estarán sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo para los demás créditos y no se aplicarán respecto de los mismos las disposiciones especiales existentes. Sin embargo, tratándose de créditos fiscales y parafiscales, el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen condonación o rebajas por impuestos, tasas o contribuciones, salvo en los casos en que lo permitan las disposiciones fiscales.

Artículo 142. APROBACION.

El acuerdo concordatario será aprobado en la misma audiencia, por la Superintendencia de Sociedades, si reúne los requisitos exigidos en esta ley y será obligatorio para el deudor y los acreedores inclusive los ausentes y disidentes.

La providencia que apruebe el concordato sólo tendrá recurso de reposición, el cual deberá resolverse en la misma audiencia, si fuere posible. De lo contrario, ésta se suspenderá para ser reanudada el quinto día hábil siguiente, sin necesidad de nueva convocatoria y en su reanudación se decidirá el recurso, aún cuando no asistan las partes o sus apoderados y quedará notificada en estrados.

El acuerdo se hará constar en acta firmada únicamente por el Superintendente o su Delegado

Artículo 143. INSCRIPCION DEL ACTA Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES.

La Superintendencia de Sociedades en la providencia de aprobación del acuerdo concordatario, se ordenará a las autoridades o entidades correspondientes la inscripción de la misma, junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo concordatario.

En la misma providencia se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares vigentes, salvo que en el acuerdo se haya dispuesto otra cosa.

Cuando el acuerdo tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir gravámenes o cancelarlos, ordenará la inscripción de la parte pertinente del acta en el correspondiente registro, no siendo necesario el otorgamiento previo de ningún documento.

Artículo 144. CANCELACION Y RESTABLECIMIENTO DE GRAVAMENES.

Una vez aprobado el acuerdo, la Superintendencia de Sociedades ordenará la cancela-

ción o la reforma de los gravámenes constituidos sobre bienes del deudor, conforme a los términos del concordato.

Si el concordato se declara terminado por incumplimiento, los gravámenes constituidos con anterioridad a aquél se restablecerán para asegurar el pago de los saldos insolutos de los créditos amparados con tales garantías, siempre que en cumplimiento de lo acordado no se hubieren enajenado los bienes. Si éstos hubieren sido enajenados, dichos acreedores gozarán de la misma prelación que les otorgaba el gravamen para que se les pague el saldo insoluto de sus créditos, hasta concurrencia del monto por el cual haya sido enajenado el respectivo bien.

Artículo 145. TERMINACION DE LAS FUNCIONES DEL CONTRALOR Y DE LA JUNTA PROVISIONAL.

El contralor y la junta provisional de acreedores cesarán en sus funciones una vez aprobado el acuerdo concordatario.

Artículo 146. IMPROBACION DEL ACUERDO.

Si la Superintendencia de Sociedades improbare el acuerdo, expresará las razones que tuvo para ello, y suspenderá la audiencia para continuarla el décimo día siguiente, a fin de que se adopten las reformas conducentes. Si reanudada la audiencia, se adoptaren las medidas respectivas, la Superintendencia de Sociedades lo aprobará. Si no fuere posible el acuerdo, así lo declarará e iniciará el trámite liquidatorio.

Artículo 147. DECLARACION DE CUMPLIMIENTO.

Cumplido el acuerdo concordatario, la Superintendencia de Sociedades así lo declarará mediante providencia que se inscribirá en la cámara de comercio o en la oficina correspondiente y contra la cual sólo procederá recurso de reposición.

SECCION XII

ACUERDO POR FUERA DE AUDIENCIA

Artículo 148. VIABILIDAD.

A partir de la audiencia preliminar y mientras no se haya aprobado acuerdo concordatario, el deudor y los acreedores que representen por lo menos del setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los créditos reconocidos y admitidos, o sus apoderados, podrán solicitar a la Superintendencia de Sociedades la aprobación del acuerdo concordatario que le presenten personalmente quienes lo suscriban.

La Superintendencia lo aprobará dentro de los diez días siguientes a la fecha de presentación del escrito, si reúne los requisitos exigidos en la presente ley, y le serán aplicables las disposiciones respectivas. Si la Superintendencia niega la aprobación, continuará el trámite del concordato.

SECCION XIII MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 149. VIGENCIA.

Los embargos practicados en los procesos remitidos continuarán vigentes a órdenes de la Superintendencia de Sociedades, para lo cual se dará aviso a la oficina de registro correspondiente, si fuere el caso.

Recibidos los expedientes se ordenará a los secuestrados, que a más tardar dentro de los diez días siguientes, restituyan los bienes al deudor o a la persona que se determine en la providencia. Efectuada la restitución, se levantará el secuestro, debiendo el secuestrado presentar cuentas comprobadas de su gestión, dentro de los veinte días siguientes, para que una vez queden aprobadas, se fijen y cancelen sus honorarios.

Además de las sanciones penales a que haya lugar, al secuestro que no restituya oportunamente los bienes, se le impondrá una multa hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la obligación de restituir. En todo caso, la Superintendencia de Sociedades podrá solicitar el concurso y auxilio de la fuerza pública, para obtener la entrega de los bienes que se encuentren en poder del secuestrado.

Artículo 150. DECRETO, PRACTICA Y OPOSICION.

En cualquier estado del trámite del concordato, la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a petición de cualquier acreedor, además del embargo y secuestro de bienes, podrá decretar otras medidas cautelares que estime necesarias.

El decreto, práctica y oposición a las medidas cautelares, se decidirá por la Superintendencia con sujeción a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, sin necesidad de prestar caución. Las providencias que se dicten sólo tendrán recurso de reposición.

Se rechazará de plano la oposición fundada en la existencia de un derecho de retención, sobre los bienes objeto de la medida cautelar, sin perjuicio del privilegio que para el pago la ley le otorga.

Artículo 151. LEVANTAMIENTO.

A solicitud del contralor o de la junta provisional de acreedores, la Superintendencia de Sociedades decretará, en cualquier momento, el levantamiento de las medidas cautelares, si lo considera conveniente para el buen funcionamiento de la empresa, o si fuere indispensable la enajenación o gravamen de algún bien que se encuentre sujeto a ellas.

SECCION XIV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 152. OBLIGACIONES POST-CONCORDATARIAS.

Los gastos de administración, los de conservación de bienes del deudor y las demás obliga-

ciones causadas durante el trámite del concordato y la ejecución del acuerdo concordatario y las calificadas como post-concordatarias, serán pagados de preferencia y no estarán sujetos al sistema que en el concordato se establezca para el pago de las demás acreencias, pudiendo los acreedores respectivos acudir a la justicia ordinaria para el cobro de los mismos.

Artículo 153. ACUMULACION PROCESAL.

Cuando simultáneamente con el trámite del concordato y antes de ser aprobado el acuerdo, se adelanten concordatos de otras entidades vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordinadas, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por los mismas personas, sea que éstas obren directamente o por conducto de otras personas jurídicas, de oficio o a solicitud de cualquiera de los acreedores o del deudor, la Superintendencia de Sociedades decretará la acumulación de ellos, mediante el trámite que para la acumulación de procesos establece el Código de Procedimiento Civil.

PARAGRAFO. Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación y en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquélla. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente.

CAPITULO III

DE LA LIQUIDACION OBLIGATORIA

SECCION I

REQUISITOS Y EFECTOS

Artículo 154. SUJETOS LEGITIMADOS.

El trámite de liquidación obligatoria podrá ser solicitado por el deudor o decretado de oficio por la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 155. APERTURA.

El trámite de liquidación obligatoria se abrirá:

1. Por decisión de la Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio o como consecuencia de la solicitud de apertura de un proceso concursal.

2. Por terminación del trámite concordatario por falta de acuerdo o por incumplimiento de éste.

3. Cuando el deudor se ausente y haya abandonado sus negocios.

Artículo 156. EFECTOS DE LA APERTURA.

La apertura del trámite liquidatorio implica:

1. La separación de los administradores de la entidad deudora, en los casos previstos en la presente ley.

2. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo.

La apertura del trámite liquidatorio del deudor solidario, no conllevará la exigibilidad de las obligaciones solidarias respecto de los otros codeudores.

3. La disolución de la persona jurídica, en tal caso para todos los efectos legales, esta deberá anunciarse siempre con la expresión "en liquidación obligatoria", salvo que dentro del trámite se pacte su continuación, caso en el cual tal medida queda sin efecto.

4. La formación de los activos que componen el patrimonio a liquidar.

5. La remisión e incorporación al trámite de la liquidación de todos los procesos de ejecución que se sigan contra el deudor. Con tal fin se oficiará a los jueces que puedan conocer de procesos ejecutivos contra el deudor.

6. La preferencia del trámite liquidatorio, para lo cual se aplicarán las reglas previstas en el concordato para tal efecto.

SECCION II

REMOCION E INHABILIDAD

Artículo 157. REMOCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.

Los administradores de la entidad deudora, serán removidos en los mismos eventos previstos para el concordato.

Artículo 158. INHABILIDAD.

Además de la remoción prevista en esta ley, los administradores de la entidad deudora serán inhabilitados para ejercer el comercio, cuando quiera que se den uno o varios de los siguientes eventos o conductas:

1. Se compruebe que constituyeron o utilizaron la empresa con el fin de defraudar a los acreedores.

2. Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica.

3. La destrucción total o parcial de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar.

4. La malversación o dilapidación de bienes, que conduzca a la apertura del trámite liquidatorio.

5. El incumplimiento sin justa causa del acuerdo de recuperación suscrito con sus acreedores.

6. Cuando antes o después de la apertura del trámite, especule con las obligaciones a su cargo, adquiriéndolas a menor precio.

7. La distracción, disminución u ocultamiento total o parcial de bienes.

8. La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas o pérdidas.

9. Cuando sin justa causa y en detrimento de los acreedores, hubieren desistido, renunciado o transigido, una pretensión patrimonial cierta.

10. La ejecución de cualquier acto similar, con el cual se cause perjuicio a la entidad deudora, sus asociados o en general a los terceros.

Artículo 159. COMPETENCIA.

La Superintendencia de Sociedades en cualquier etapa del trámite liquidatorio, de oficio o a solicitud de cualquier acreedor, o del liquidador, decretará la remoción y la inhabilitación, cuando encuentre demostradas cualquiera de las causales previstas en esta ley.

Ejecutoriada la providencia, se inscribirá en el registro mercantil o cualquier otro que corresponda. La entidad que inscriba la inhabilitación deberá hacerla conocer de las demás oficinas de igual naturaleza, existentes en el país.

PARAGRAFO. Sin perjuicio de las funciones que le corresponden al liquidador, y en la providencia que ordene la remoción, la Superintendencia convocará al órgano social encargado de efectuar la designación, para que proceda a nombrar a quien haya de reemplazar al removido y se aplicarán las disposiciones que al efecto se establece en el trámite del concordato.

Artículo 160. REHABILITACION DE ADMINISTRADORES.

Los administradores o liquidadores a quienes se les haya aplicado la prohibición de ejercer el comercio, podrán solicitar su rehabilitación, cuando la entidad deudora haya cumplido con el acuerdo celebrado en el trámite de la liquidación obligatoria, o cuando se hayan cancelado la totalidad de las obligaciones reconocidas en la providencia de calificación y graduación de créditos.

Igualmente habrá lugar a solicitar la rehabilitación, cuando hubieren transcurrido diez años de haber sido decretada.

Artículo 161. TRAMITE.

La solicitud de inhabilitación, se tramitará como incidente, en la forma y términos previstos en el Código de Procedimiento Civil, actuación que no suspende el curso del trámite liquidatorio.

SECCION III

PROVIDENCIA DE APERTURA

Artículo 162. CONTENIDO.

En la providencia de apertura del trámite de liquidación obligatoria se ordenará:

1. El embargo, secuestro y avalúo de todos los bienes embargables del deudor.

Estas medidas prevalecerán sobre los embargos y secuestros que se hayan decretado y practicado en otros procesos en que se persigan bienes del deudor.

2. La aprehensión inmediata de sus libros de cuentas y demás documentos relacionados con sus negocios.

3. A la Cámara de Comercio la inscripción de la providencia en el registro mercantil o en el registro correspondiente, del domicilio principal del deudor y demás lugares donde tenga sucursales, agencias o establecimientos de comercio.

A partir de la inscripción, todo pago o extinción de obligaciones que deban cobrarse en el trámite liquidatorio, se sujetará a las reglas establecidas en esta ley.

4. La prevención a los deudores del deudor de que sólo pueden pagar al liquidador, advirtiéndole la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta;

5. La prevención a todos los que tengan negocios con el deudor, inclusive procesos pendientes, de que deben entenderse exclusivamente con el liquidador, para todos los efectos legales.

6. El nombramiento y la inscripción en el registro mercantil o en el registro correspondiente, de la persona designada como liquidador.

7. El emplazamiento de los acreedores por medio de edicto que se fijará al día siguiente de proferida la providencia de apertura, por el término de diez días, en la Superintendencia de Sociedades. Durante el término de fijación del edicto, éste se publicará por el liquidador o cualquier acreedor en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal del deudor, si lo hubiere, y será radiodifundido en una emisora que tenga sintonía en dicho domicilio. Las publicaciones y la constancia de la emisora deberán allegarse dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto.

PARAGRAFO. La providencia de apertura se notificará en la forma prevista para el concordato y procederán los recursos allí establecidos.

SECCION IV

PRESENTACION DE CREDITOS

Artículo 163. OPORTUNIDAD PARA HACERSE PARTE.

A partir de la providencia de apertura del trámite liquidatorio y hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los acreedores deberán hacerse parte personalmente o por medio de apoderado, presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus créditos.

Cuando el trámite liquidatorio se inicie como consecuencia del fracaso o incumplimiento del concordato, los acreedores reconocidos y admitidos en él, se entenderán presentados en tiempo en el trámite liquidatorio, y sus apoderados continuarán ejerciendo sus funciones, salvo revocatoria o renuncia del mandato. Los acreedores extemporáneos en el concordato,

deberán hacerse parte en el trámite liquidatorio, en la oportunidad prevista en el inciso anterior.

Artículo 164. OBLIGACIONES DIFERENTES AL PAGO DE SUMA DE DINERO.

Si la obligación es diferente a la del pago de sumas de dinero, el acreedor al hacerse parte deberá solicitar los perjuicios compensatorios, estimándolos y especificándolos bajo juramento, si no figuran en el título, en una cantidad como principal y en otra como tasa de interés mensual.

Artículo 165. PROHIBICION DE FORMULAR OBJECIONES.

Si el trámite liquidatorio se inicia como consecuencia del fracaso o del incumplimiento del concordato, los créditos presentados en él y que no hubieren sido objetados, o cuya objeción hubiere sido conciliada o decidida, no podrán ser controvertidos en la etapa de la liquidación, salvo que la objeción corresponda a hechos ocurridos con posterioridad a las etapas indicadas.

Artículo 166. PRELACION DE CREDITOS POST-CONCORDATARIOS.

Cuando el trámite liquidatorio se inicie por causa del fracaso o del incumplimiento del concordato, los gastos de administración originados en dicha etapa, deberán graduarse y calificarse para que sean cancelados de manera preferencial, en relación con cualquier otro crédito presentado en la liquidación. En consecuencia, el liquidador una vez cancele estas acreencias, procederá a pagar las demás atendiendo el orden y la prelación definidos en la providencia de graduación y calificación.

SECCION V

LIQUIDADOR

Artículo 167. DESIGNACION.

El liquidador será designado por la Superintendencia de Sociedades en la misma providencia que ordene la apertura del trámite liquidatorio.

El liquidador será escogido de la lista que al respecto haya elaborado la Superintendencia de Sociedades con personas idóneas para ejercer dicho cargo.

Hecha la designación la Superintendencia de Sociedades la comunicará telegráficamente, a fin de que acepte el cargo, so pena de ser reemplazado.

PARAGRAFO. No obstante, a juicio del funcionario competente, podrá ser designado liquidador cualquiera de los administradores o al representante legal de la entidad deudora, que figure inscrito en el momento de la apertura del trámite.

Artículo 168. REQUISITOS.

Para figurar en las listas de liquidadores se requiere:

1. Título universitario.
2. Tener experiencia acreditada en el manejo de empresas cuya actividad sea similar o afín

con el objeto social de la entidad sometida a liquidación obligatoria.

PARAGRAFO. Podrán ser designados como liquidadores, las sociedades fiduciarias, las sociedades y personas jurídicas debidamente constituidas cuyo objeto sea asesoría en la recuperación y liquidación de empresas. Pero en todo caso, deberán designar la persona o personas naturales que en su nombre ejecutarán el encargo.

Artículo 169. INHABILIDADES.

No podrá ser designado liquidador:

1. Quien sea asociado de la entidad en liquidación, o de alguna de sus matrices, filiales o subordinadas, o tenga el carácter de acreedor o deudor a cualquier título, de la entidad en liquidación.

2. Quien ejerza el cargo de revisor fiscal.

Artículo 170. OBLIGACION DE PRESTAR CAUCION.

El liquidador deberá prestar caución para responder de su gestión y de los perjuicios que con ella irrogare, en el término, cuantía y forma fijados por la Superintendencia de Sociedades al hacer la designación. La Superintendencia podrá decretar en cualquier tiempo el reajuste de la caución, de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 171. FUNCIONES DEL LIQUIDADOR.

El liquidador tendrá la representación legal de la entidad deudora y como tal desempeñará las funciones que adelante se le asignan, y en ejercicio de ellas deberá concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura del trámite y en especial las siguientes:

1. Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realización de una liquidación del patrimonio rápida y progresiva.

2. Gestionar el recaudo de los dineros y la recuperación de los bienes que por cualquier circunstancia deban ingresar al activo a liquidar, incluso los que correspondan a capital suscrito y no pagado en su integridad, así como las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias. Igualmente, exigir de acuerdo al tipo societario las obligaciones que correspondan a los socios.

3. Elaborar el inventario de los activos que conforman el patrimonio a liquidar, el cual deberá presentar a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los treinta días siguientes a la aceptación del cargo.

4. Ejecutar los actos necesarios para la conservación de los activos y celebrar todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la liquidación, con las limitaciones aquí establecidas, incluidos los negocios o encargos fiduciarios que faciliten la cancelación del pasivo.

5. Continuar con la contabilidad del deudor en los mismos libros, siempre y cuando se encuentren debidamente registrados. En caso

de no ser posible, deberá proveer a su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquidación, en libros que deberá registrar en la Cámara de Comercio.

6. Enajenar a cualquier título, los bienes consumibles del deudor, de lo cual dará inmediata información a la junta asesora.

7. Enajenar, con las restricciones aquí establecidas, los bienes del deudor.

8. Atender con los recursos de la liquidación, todos los gastos que ella demande, cancelando en primer término el pasivo externo, observando el orden de prelación establecido en la providencia de graduación y calificación.

9. Exigir cuentas comprobadas de su gestión a los liquidadores anteriores, y a los secuestres designados en los juicios que se incorporen a la liquidación.

10. Rendir cuentas comprobadas de su gestión, en las oportunidades y términos previstos en esta ley.

11. Realizar, con la aprobación previa de la junta asesora, los castigos contables de activos que resulten pertinentes, caso en el cual deberá informar a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los quince días siguientes a la adopción de tal determinación.

12. Mantener y conservar los archivos del deudor.

13. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades, el decreto y práctica del secuestro provisional de los bienes que constituyen el patrimonio a liquidar.

14. Promover acciones de responsabilidad civil o penal, contra los asociados, administradores, revisores fiscales y funcionarios de la entidad en liquidación obligatoria, y en general contra cualquier persona a la cual pueda deducirse responsabilidad.

15. Intentar con autorización de la junta asesora, todas las acciones necesarias para la conservación y reintegración de los bienes que conforman el patrimonio a liquidar, lo mismo que atender y resolver las solicitudes de restitución de los bienes que deban separarse del mismo patrimonio.

16. Presentar a consideración de la junta asesora, un plan de pago de las obligaciones, teniendo en cuenta el inventario y la providencia de calificación y graduación de créditos.

17. Las demás previstas en esta ley.

PARAGRAFO. El liquidador en ejercicio de sus funciones, queda investido de facultades para transigir, comprometer, novar, conciliar o desistir judicial o extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de acuerdo con la ley y esté previamente facultado por la junta asesora.

Artículo 172. RESPONSABILIDAD.

El liquidador responderá al deudor, a los asociados, acreedores y terceros, y si fuere del caso a la entidad deudora, por el patrimonio que

recibe para liquidar, razón por la cual, para todos los efectos legales, los bienes inventariados y el avalúo de los mismos realizado conforme a las normas previstas, determinarán los límites de su responsabilidad. De la misma manera, responderá de los perjuicios que por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes cause a las mencionadas personas.

Las acciones contra el liquidador caducarán en un término de cinco años, contado a partir de la cesación de sus funciones y se promoverán ante la justicia ordinaria de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 173. RENDICION DE CUENTAS.

El liquidador, al término de su gestión y anualmente, a más tardar el 31 de marzo de cada año deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión. Para tal efecto presentará:

1. Estados de liquidación, junto con sus notas.
2. Estados financieros básicos, junto con sus notas.
3. Memoria detallada de las actividades realizadas durante el período.

Los estados mencionados en este artículo serán certificados por el liquidador, un contador público y el revisor fiscal, si lo hubiere, y se prepararán y presentarán de acuerdo con las normas reglamentarias.

Artículo 174. TRASLADO DE LAS CUENTAS.

Las cuentas rendidas por el liquidador en la forma prevista en la presente ley, junto con los documentos y comprobantes que permitan la verificación de las mismas, se pondrán a disposición de los acreedores y socios por el término de diez días, a fin de que puedan objetarlas por falsedad, inexactitud, error grave o por cualquier otra causa. Dichas objeciones se tramitarán y decidirán por la Superintendencia de Sociedades mediante el trámite incidental, el cual no suspende el curso de la liquidación.

Sin perjuicio de la facultad oficiosa de improbarlas, la Superintendencia mediante providencia que no tiene recurso, aprobará las cuentas si no fueren objetadas, cuando advierta falsedad, inexactitud o error grave.

Artículo 175. HONORARIOS.

Los honorarios provisionales del liquidador serán fijados por la Superintendencia de Sociedades, en la providencia de apertura del trámite liquidatorio, teniendo en cuenta la naturaleza de la liquidación, el activo patrimonial liquidable y la complejidad de la gestión.

Los honorarios definitivos se señalarán, previa aprobación de las cuentas correspondientes a su gestión.

Los honorarios provisionales serán pagados como gastos de administración, con la prelación que para estos efectos le concede la ley y los definitivos con cargo a la provisión que se constituya para tal fin.

La Superintendencia de Sociedades además de fijar el valor de los honorarios indicará la forma y períodos de pago de los mismos.

Artículo 176. REMOCION.

Habrà lugar a la remoción del liquidador, de oficio o a petición de la junta asesora, cuando se acredite el incumplimiento grave de sus funciones.

De la solicitud de remoción se dará traslado al liquidador, por el término de cinco días, vencido el cual se decidirá la misma y se designará la persona que haya de sustituirlo. Contra esta providencia procede únicamente el recurso de reposición.

Si se encuentra probado el motivo de la remoción, el liquidador no tendrá derecho al pago de los honorarios definitivos.

Artículo 177. CESACION DE FUNCIONES.

Las funciones del liquidador cesarán en los siguientes casos:

1. Como consecuencia de renuncia debidamente aceptada, y una vez su reemplazo se inscriba en el registro mercantil o en el registro correspondiente.
 2. En caso de remoción, a partir de la inscripción en el registro mercantil de la providencia que lo remueve.
 3. En caso de muerte de la persona natural, o disolución de la compañía designada como liquidadora.
 4. Cuando no preste la caución o se niegue a reajustarla.
- Copia de la respectiva providencia se inscribirá en el registro mercantil o en el registro correspondiente.

SECCION VI

JUNTA ASESORA DEL LIQUIDADOR

Artículo 178. DESIGNACION.

Durante el trámite liquidatorio la Superintendencia de Sociedades designará una Junta Asesora del Liquidador con sus respectivos suplentes personales, integrada así:

1. Un representante de las entidades públicas acreedoras.
2. Un representante de los trabajadores acreedores.
3. Un representante de las entidades financieras acreedoras.
4. Un representante de los acreedores con garantía real, que no sean entidades financieras.
5. Un representante de los socios.
6. Dos representantes de los acreedores quirografarios.

En caso de que no exista alguna de las categorías de acreedores a que se refieren los anteriores literales, la designación podrá recaer en un miembro de cualquier otra.

La designación de la junta, si ello fuere posible, se hará en la providencia de apertura del trámite liquidatorio, o más tardar antes de que precluya el término para que los acreedores se hagan parte. Cuando por cualquier causa no se integre o no esté funcionando la Junta, las funciones que a ella le competen las asumirá temporalmente la Superintendencia de Sociedades, la que en todo caso, deberá proveer su integración o reemplazo de sus miembros.

El liquidador asistirá por derecho propio a las reuniones de la junta asesora, pero no tendrá voto.

Artículo 179. FUNCIONAMIENTO.

La junta elegirá un Presidente entre sus miembros y un Secretario; deliberará y decidirá con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes.

La junta se reunirá por derecho propio, por lo menos, una vez al mes, y extraordinariamente cuando sea convocada por el liquidador, por el Presidente de la misma, por la Superintendencia de Sociedades o por tres de sus miembros, donde al menos uno actúe como principal. La convocatoria se hará por cualquier medio escrito, y con una antelación no inferior a tres días comunes a la fecha de la reunión, excepto que se encuentre reunida la totalidad de sus integrantes.

Si reunida la junta, no se logra la mayoría requerida para adoptar una decisión, la Superintendencia de Sociedades dirimirá las diferencias, profiriendo la determinación que a bien tenga.

Las reuniones se efectuarán en el domicilio del deudor, en el lugar, fecha y hora que se indique en el aviso de convocatoria.

Artículo 180. ACTAS.

De las reuniones se levantarán actas suscritas por el Presidente o el Secretario, las cuales se harán constar en un libro de actas. Copia de las mismas deberá enviarse por el secretario a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los diez días siguientes a cada sesión.

Artículo 181. CAUSALES DE REMOCION.

Habrà lugar a la remoción de los miembros de la junta asesora, en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Cuando lo soliciten acreedores que representen no menos del cincuenta por ciento (50%) de las acreencias de la misma categoría.
2. Por inasistencia a tres sesiones de la misma.
3. De oficio, cuando la Superintendencia de Sociedades considere necesario reintegrar, total o parcialmente la junta, con el fin de asegurar su adecuado funcionamiento.

Artículo 182. REEMPLAZO.

Siempre que deba proveerse un reemplazo, la Superintendencia de Sociedades lo designará entre los miembros de la misma categoría; si no existiere ninguno, la designación podrá recaer en un miembro de cualquier otra.

Artículo 183. FUNCIONES.

La junta tendrá como atribución general la de asesorar y fiscalizar la gestión del liquidador, y en consecuencia se le atribuyen las siguientes funciones:

1. Disponer el avalúo de los bienes que constituyen el patrimonio a liquidar, cuantas veces ello sea necesario y nombrar los peritos que deban efectuarlo, así como su remuneración.

2. Autorizar los términos y condiciones en que deba llevarse a cabo toda enajenación de activos.

3. Autorizar al liquidador para enajenar los bienes muebles o mercancías que se encuentren en estado de deterioro o de las cuales se tema razonablemente que lleguen a deteriorarse o perecer.

4. Requerir al liquidador para que dé cuenta de las negociaciones realizadas sobre bienes consumibles del deudor.

5. Revisar previamente las cuentas presentadas por el liquidador, para lo cual podrá hacer las observaciones y objeciones que considere pertinentes.

6. Solicitar al liquidador, cuando lo considere oportuno la presentación de los estados financieros.

7. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades, el decreto, práctica y levantamiento de medidas cautelares.

8. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades autorización para efectuar pago a acreedores, antes de la providencia de calificación y graduación de créditos.

9. Asesorar al liquidador, cuando éste se lo solicite, en cuestiones relacionadas con su gestión.

10. Requerir al liquidador para que presente las cuentas comprobadas de su gestión, de acuerdo con lo previsto en esta ley, o cuando lo considere necesario.

11. Solicitar la remoción del liquidador

12. Dar concepto previo favorable o desfavorable, al liquidador sobre la entrega de bienes que no forman parte de los activos patrimoniales liquidables, en atención al reclamo que hagan terceras personas.

13. Citar al liquidador por lo menos con tres días comunes de antelación, indicando los temas que se vayan a tratar.

14. Verificar el inventario que de los activos patrimoniales a liquidar, elabore el liquidador, antes de ser sometido a la aprobación de la Superintendencia de Sociedades.

15. Autorizar el castigo contable de partidas que conformen los activos, de acuerdo con la situación real de los mismos y a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

16. Disponer la constitución de una reserva adecuada, para atender el pago oportuno de las obligaciones condicionales o sujetas a litigio.

Dicha reserva se invertirá en forma que asegure su conservación y rendimiento.

17. Todas las demás previstas en ésta u otras leyes, tratados o convenios internacionales.

SECCION VII**PATRIMONIO A LIQUIDAR**

Artículo 184. BIENES QUE LO INTEGRAN.

El patrimonio del deudor que es objeto de la liquidación obligatoria, está conformado por la totalidad de los activos que tengan un valor económico y la totalidad de los pasivos. Se exceptúan los bienes inembargables y los derechos personalísimos e intransferibles.

Artículo 185. INVENTARIO.

Los activos del deudor se relacionarán uno a uno, en inventario que deberá elaborar el liquidador dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aceptación del cargo.

El inventario se adicionará con los incrementos que modifiquen los activos, así como con los nuevos activos que por cualquier circunstancia ingresen al patrimonio y aquellos que varíen el mismo, para lo cual el liquidador deberá elaborar inventarios adicionales.

Tanto el inventario inicial como los inventarios adicionales, si los hubiere, deberán ser verificados previamente por la junta asesora del liquidador y, posteriormente sometidos a la aprobación de la Superintendencia de Sociedades.

Con los mencionados inventarios se abrirá un cuaderno, el cual quedará a disposición de los socios, acreedores y terceros, con el objeto de que en cualquier tiempo denuncien bienes de propiedad del deudor, que no se encuentren incluidos, o soliciten la exclusión de los que no le pertenezcan, antes de que precluya el término señalado para ello. En tales eventos, el liquidador procederá dentro de los treinta días siguientes a modificar el inventario y dará cumplimiento al procedimiento para entrega de bienes.

Artículo 186. AVALUO.

Aprobado el inventario, la junta asesora del liquidador ordenará el avalúo de los bienes, para lo cual designará las personas naturales o jurídicas, que a su juicio sean idóneas para llevarlo a cabo, a quienes les señalará el término dentro del cual deben cumplir el encargo.

Aprobado el avalúo se procederá a la enajenación de los bienes, en los términos de la presente ley.

Tratándose de bienes cotizados en bolsa o cuando se trate de la enajenación especial, no se requerirá el avalúo.

Artículo 187. CONTRADICCIÓN DEL AVALUO.

El avalúo se presentará a la Superintendencia de Sociedades, la que lo pondrá a disposición de las partes por el término de diez días, a fin de que las mismas soliciten su aclaración, adición o lo

objeten por error grave. Al escrito de objeciones deberán acompañarse las pruebas que el objetante pretenda hacer valer. Surtido lo anterior, la Superintendencia decidirá de plano.

Sin perjuicio de la facultad oficiosa, la Superintendencia de Sociedades aprobará el avalúo si dentro del término del traslado no se formulan solicitudes de objeción, aclaración o adición.

SECCION VIII**DE LAS ACCIONES REVOCATORIAS**

Artículo 188. ACCION REVOCATORIA.

Cuando los bienes que componen el patrimonio liquidable, sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos, podrá demandarse la revocación de los siguientes actos o negocios, realizados por el deudor:

1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago, y en general todo acto que implique disposición, constitución o cancelación de gravamen, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor, realizados en detrimento de los intereses o derechos de los acreedores, durante los doce meses anteriores a la apertura del trámite concursal, cuando no aparezca que el adquirente obró con buena fe exenta de culpa.

2. Todo acto que a título gratuito se hubiere celebrado dentro de los veinticuatro meses anteriores a la apertura de trámite concursal.

3. Las reformas estatutarias y las liquidaciones sociales acordadas de manera voluntaria por los socios, formalizadas dentro de los seis meses anteriores a la apertura del trámite concursal, cuando con ellas se haya disminuido el patrimonio del deudor en perjuicio de los acreedores.

Artículo 189. DE LA ACCION DE SIMULACION.

Bajo el mismo supuesto de insuficiencia de bienes, podrá demandarse la declaratoria de simulación de los actos y contratos celebrados por el deudor.

Artículo 190. TERMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA.

Las acciones revocatorias podrán interponerse por el liquidador o por cualquiera de los acreedores reconocidos en el trámite liquidatorio, dentro del año siguiente a la fecha en que quede en firme la providencia de graduación y calificación de créditos.

Artículo 191. RECOMPENSAS.

En el evento que la acción fuere interpuesta por un acreedor, y ella prosperare total o parcialmente, éste tendrá derecho a que en la sentencia se le reconozca a título de recompensa, una suma equivalente al diez por ciento del valor comercial del bien que se recupere para el patrimonio a liquidar, o del beneficio que directa o indirectamente se reporte.

Artículo 192. TRAMITE.

Las acciones revocatorias y de simulación se tramitarán ante el juez civil del circuito especia-

lizado si lo hubiere o juez civil del circuito del domicilio del deudor, por el trámite del proceso verbal de mayor y menor cuantía que regula el Código de Procedimiento Civil, el cual no suspenderá ni afectará el curso del trámite liquidatorio. El juez y el tribunal darán prelación a estos procesos, so pena de incurrir en mala conducta, salvo que prueben causa que justifique la demora.

Artículo 193. DELAS MEDIDAS CAUTELARES ESPECIALES.

Además de las anteriores medidas, cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de simulación de actos del deudor, el juez competente, si lo considera oportuno, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución, decretará el embargo y secuestro de bienes, la inscripción de la demanda, o cualquier otra medida cautelar que a su juicio resulte útil para los fines enunciados. Estas medidas también se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 194. ALCANCE.

La sentencia que decreta la revocación o la simulación del acto demandado, dispondrá entre otras medidas la cancelación de la inscripción de los derechos del demandado vencido y las de sus causahabientes, y en su lugar se inscribirá al deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan. Con tal fin, se librarán las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro correspondientes.

Quienes hayan contratado con el deudor, y los causahabientes de mala fe de quien contrató con éste, estarán obligados a restituir al patrimonio liquidable, las cosas enajenadas en razón de la revocación o la declaración de simulación. Si la restitución no fuere posible se ordenará entregar al liquidador el valor de las cosas en la fecha de la sentencia, deducidas las mejoras útiles y necesarias plantadas por el poseedor de buena fe.

Quienes habiendo contratado de buena fe con el deudor, hubieren sido vencidos, tendrán derecho a participar en la liquidación, a prorrata con los demás acreedores por el monto de lo que dieron al deudor como contraprestación.

Artículo 195. MEDIDAS CAUTELARES.

Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de simulación de los actos del deudor, el juez competente, si lo considera oportuno, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución, decretará el embargo y secuestro de bienes, o la inscripción de la demanda, o cualquier otra medida cautelar que a su juicio resulte útil para los fines enunciados. Estas medidas también se sujetarán a las disposiciones previstas en el estatuto procesal civil.

Artículo 196. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS SOCIOS.

Cuando sean insuficientes los activos para atender al pago del pasivo externo de la entidad deudora, el liquidador deberá exigir a los

socios el pago de las siguientes prestaciones, así:

1. El valor de los instalamentos de las cuotas o acciones no pagadas.
2. El faltante del pasivo externo por cubrir, de acuerdo al respectivo tipo societario.
3. El valor correspondiente a la responsabilidad adicional que se hubiere pactado en los estatutos.

Para los efectos de este artículo, el liquidador promoverá proceso ejecutivo contra los socios, sin necesidad de concepto previo de la junta asesora. En estos procesos el título ejecutivo, se integrará por la copia de los inventarios y avalúos debidamente aprobados y una certificación de contador público o de revisor fiscal, si lo hubiere, que acredite la insuficiencia de los activos y la cuantía de la prestación a cargo del socio. No obstante, los socios podrán proponer como excepción la suficiencia de los activos sociales, o el hecho de que no se destinaron al pago del pasivo externo de la sociedad.

SECCION IX

BIENES EXCLUIDOS DEL PATRIMONIO A LIQUIDAR

Artículo 197. BIENES EXCLUIDOS.

No formarán parte del patrimonio a liquidar, los siguientes bienes:

1. Las mercancías que tenga el deudor en su poder a título de comisión.
2. Los títulos de crédito que se hayan enviado o entregado al deudor para su cobranza y los que haya adquirido por cuenta de otro, siempre y cuando estén emitidos o endosados directamente a favor del comitente.
3. El dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, en desarrollo de una comisión o mandato del comitente o mandante.
4. Las mercancías que el deudor haya adquirido al fiado, mientras no se haya producido su entrega.
5. Los bienes que tenga el deudor en calidad de depositario.
6. Las prestaciones que por cuenta ajena, se estén debiendo al deudor, a la fecha de la apertura del trámite liquidatorio, si del hecho hubiere por lo menos un principio de prueba.
7. Los documentos que estén en poder del deudor, siempre que los hubiere recibido por cuenta de un comitente, aun cuando, no estén otorgados a favor de éste.
8. En general, las especies que aún encontrándose en poder del deudor pertenezcan a otra persona, para lo cual se deberá acreditar la prueba suficiente.

Artículo 198. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGAR BIENES EXCLUIDOS.

El liquidador hará entrega de los bienes que no formen parte del patrimonio a liquidar, a quien lo solicite por escrito, antes de que éstos hayan sido enajenados, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos:

1. Acompañe prueba suficiente del derecho que le asiste.

2. Obtenga concepto previo favorable de la junta asesora del liquidador.

Cumplidos los requisitos, se procederá a la entrega, para lo cual el liquidador levantará un acta en la que se identificará el bien que se excluye y entrega, así como el estado del mismo, y la que deberá suscribirse por el liquidador y quien reciba. Copias de la solicitud, de las pruebas allegadas y del acta se remitirán a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los cinco días siguientes a la entrega. Tales documentos servirán como soporte para descargar dicho valor de la contabilidad y modificar el inventario practicado.

PARAGRAFO. Si el liquidador o la junta asesora no accedieren a la entrega, darán traslado de toda la actuación a la Superintendencia de Sociedades, dando cuenta razonada de ello, para que ésta de plano decida lo pertinente.

SECCION X

REALIZACION DE ACTIVOS Y PAGO A LOS ACREEDORES

Artículo 199. REGLAS DE LA ENAJENACION.

Aprobados los avalúos, el liquidador procederá directamente o por medio de una entidad especializada, a la enajenación de los activos, la cual se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se preferirá la enajenación que se realice en bloque, o en estado de unidad económica. Si no pudiere hacerse en tal forma, se efectuará la enajenación separada de los distintos elementos.
2. La de bienes muebles cotizados en bolsa de valores, se llevará a cabo por el comisionista de bolsa que sea escogido por la junta asesora.
3. La de bienes muebles no inscritos en bolsa, se realizará directamente por el liquidador, por un valor no inferior a su avalúo.
4. La de los inmuebles, se efectuará directamente por el liquidador o por una compañía dedicada a la finca raíz, previamente aprobada por la junta asesora.

PARAGRAFO. La Superintendencia de Sociedades decretará el levantamiento de las medidas cautelares, que afecten los bienes objeto de la enajenación.

Artículo 200. ENAJENACION ESPECIAL.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando se trate de bienes o mercancías que se encuentren en inminente estado de deterioro o de las cuales se tema razonablemente que puedan deteriorarse o destruirse, podrá el Liquidador, previa aprobación de la junta asesora, enajenar dichos bienes, aun cuando no estén avaluados, o por un valor inferior a aquél en el que hubieren sido estimados.

Artículo 201. LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES Y CANCELACION DE GRAVAMENES.

La Superintendencia de Sociedades, a solicitud de la junta asesora o del liquidador, levantará las medidas cautelares y ordenará la cancelación de los gravámenes que afecten los bienes objeto de la enajenación.

Los acreedores en favor de los cuales se encontraban constituidos los gravámenes sobre los bienes enajenados, conservarán la prelación para el pago hasta el valor de la enajenación; y por el excedente concurrirán como acreedores quirografarios.

Artículo 202. GASTOS DE ADMINISTRACION.

Los gastos de administración surgidos durante el trámite liquidatorio, se pagarán inmediatamente y a medida que se vayan causando.

Los gastos de administración causados en el trámite del concordato, que no hubieren sido cancelados en esa etapa, se pagarán de manera privilegiada, una vez ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos.

Artículo 203. SOLUCION DE LAS OBLIGACIONES.

Ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos y en firme los avalúos practicados, el liquidador procederá a pagar, con el dinero disponible, atendiendo lo dispuesto en la graduación.

No obstante, previa autorización de la junta asesora y respetando la prelación y los privilegios de ley, podrá cancelar obligaciones mediante daciones en pago.

SECCION XI

TERMINACION

Artículo 204. DECLARATORIA DE TERMINACION.

Efectuado el pago de los pasivos externo e interno, la Superintendencia de Sociedades declarará terminada la liquidación y ordenará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Cumplido lo anterior, se archivará el expediente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda contra el deudor, los administradores y el liquidador.

Si quedaren créditos insolutos, después de agotados los bienes que conforman el patrimonio a liquidar, incluyendo el producto de las acciones de reintegración del patrimonio, la Superintendencia de Sociedades declarará terminado el trámite y ordenará archivar el expediente.

Copia de la providencia se inscribirá en el registro mercantil o en el que corresponda y conllevará la extinción de la entidad deudora.

SECCION XII

CONCORDATO DENTRO DEL TRAMITE LIQUIDATORIO

Artículo 205. ACUERDO CONCORDATARIO.

Ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos, el liquidador, el deudor o acreedores representantes de no menos del cincuenta por ciento (50%) de los créditos reco-

nocidos, podrán proponer la celebración de un concordato, para lo cual la Superintendencia de Sociedades, convocará inmediatamente a una audiencia.

Artículo 206. CONTENIDO DEL ACUERDO.

El acuerdo a que se refiere la presente sección, podrá consistir en la adopción de cualquiera de las siguientes medidas:

1. La suspensión temporal del trámite liquidatorio.

2. El aseguramiento por terceras personas de todos o algunos de los créditos aceptados.

3. El pago con los dineros que hayan ingresado al patrimonio liquidable, de todas las acreencias o de algunas de ellas.

4. La celebración de anticresis, daciones en pago y prendas; la regulación de los créditos y otras medidas enderezadas a la protección común de los acreedores y a facilitar la conclusión del trámite o la celebración de concordatos adicionales.

5. Cualquier otro acuerdo tendiente a regular las relaciones entre el deudor y los acreedores.

Artículo 207. CONTINUIDAD DE LA PERSONERIA JURIDICA.

Quando se trate de personas jurídicas, dentro de las modalidades de arreglo aprobadas, se podrá prever que la causal de disolución originada en la apertura del trámite liquidatorio, quede sin efectos, con lo cual se entenderá que no hubo solución de continuidad.

Artículo 208. REGLAS APLICABLES.

Al concordato dentro del trámite liquidatorio, se le aplicarán en lo pertinente, las reglas previstas en el trámite del concordato.

Artículo 209. REINICIO DEL TRAMITE LIQUIDATORIO.

En caso de incumplimiento del acuerdo, se reiniciará el trámite liquidatorio.

Artículo 210. ACUERDO POR FUERA DE AUDIENCIA.

A partir del traslado de las objeciones y antes de que se termine el trámite liquidatorio, el deudor y los acreedores podrán celebrar acuerdo concordatario, el cual deberá someterse a la aprobación de la Superintendencia de Sociedades, para lo cual se le deberá presentar el escrito contentivo del mismo, suscrito por el deudor y un número de acreedores que representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de los créditos presentados.

El acuerdo una vez aprobado por la Superintendencia se inscribirá en el registro correspondiente.

SECCION XIII

RESPONSABILIDAD

Artículo 211. DE LOS ADMINISTRADORES.

Quando los bienes de la liquidación sean insuficientes para solucionar el pasivo externo,

y el pago se hubiere entorpecido por las acciones u omisiones de los administradores de la entidad deudora, éstos responderán solidariamente por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado a los socios y a terceros.

Artículo 212. DE LOS SOCIOS.

Quando los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores, serán responsables del pago del faltante del pasivo externo, en proporción a los derechos que cada uno tenga en la sociedad. La demanda deberá promoverse por el acreedor respectivo y se tramitará por el proceso ordinario.

La responsabilidad aquí establecida se hará exigible sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y sin consideración al tipo societario.

Artículo 213. REMISIONES.

Al trámite liquidatorio, en lo referente a la preferencia de la liquidación, la continuación de los procesos ejecutivos donde existen otros demandados, el trámite de objeciones, la decisión de las mismas, la calificación y graduación de créditos y medidas cautelares se aplicarán las reglas previstas en el concordato para tales eventos.

CAPITULO IV

REGLAS COMUNES

Artículo 214. NO PREJUDICIALIDAD.

La iniciación, impulsión y finalización del concordato o de la liquidación obligatoria, no dependerán ni estarán condicionadas o supeditadas a la decisión que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza. De la misma manera, la decisión del proceso concursal, tampoco constituirá prejudicialidad de la determinación que deba preferir otro Juez.

Artículo 215. ENTIDADES EXCLUIDAS.

Se excluye del presente régimen concursal las sociedades sujetas al régimen de liquidación forzosa administrativa, así como todas aquellas que tengan un régimen especial de recuperación o liquidación.

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, podrán antes de su liquidación administrativa, tramitar un concordato, en los términos de la presente ley.

Artículo 216. FACULTADES DE LOS APODERADOS.

Los apoderados que designen el deudor y los acreedores que concurren al trámite del concordato o de la liquidación obligatoria, deberán ser abogados y se entenderán facultados para tomar toda clase de decisiones que correspondan a sus mandantes, inclusive las de celebrar concordato y obligarlos a las resultas del mismo.

PARAGRAFO. De conformidad con lo previsto en el presente artículo, el representante de la entidad estatal acreedora, tendrá entre otras facultades, la posibilidad de otorgar rebajas, disminuir intereses, conceder plazos, para lo

cual deberá contar con autorización expresa del funcionario respectivo de la entidad oficial.

Artículo 217. REMISION DE COPIAS CUANDO SE HA COMETIDO HECHO PUNIBLE.

Si el deudor sujeto al concordato o liquidación obligatoria, los acreedores, los asociados o sus administradores, hubieren incurrido en hechos posiblemente punibles, el Superintendente de Sociedades ordenará enviar las copias pertinentes al funcionario competente para su investigación, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

CAPITULO V

TRAMITE ANTE JUEZ

Artículo 218. APLICACION.

Salvo las disposiciones especiales que a continuación se enuncian, en lo pertinente se aplicarán las disposiciones de la presente ley al trámite del concordato o al de la liquidación obligatoria de las personas naturales y de las personas jurídicas diferentes a las sociedades comerciales.

Artículo 219. COMPETENCIA.

El concordato y la liquidación obligatoria del deudor persona jurídica diferente a las sociedades comerciales y de las personas naturales, serán conocidos en primera instancia por los Jueces Civiles del Circuito Especializados, y a falta de estos, por los Civiles del Circuito, del domicilio principal del deudor. En estos procesos no habrá diligencias preliminares a la apertura del trámite concursal.

PARAGRAFO. Las personas naturales podrán ser admitidas al trámite de la liquidación obligatoria dentro del año siguiente a su muerte.

Artículo 220. LEGITIMACION.

El trámite concordatario solamente podrá ser solicitado por el deudor. El trámite liquidatorio podrá serlo por:

1. El deudor.
2. El acreedor que haya iniciado proceso ejecutivo, en el cual los bienes embargados sean insuficientes para atender el pago de la obligación demandada, salvo que se hubiere prestado caución.
3. De oficio por el Juez que conoce del proceso ejecutivo, cuando haya hecho oferta de cesión de bienes, o exista acumulación de demandas o de procesos, y los bienes embargados sean insuficientes para atender el pago de la obligación. En este caso, si el Juez no fuere competente, remitirá lo actuado al juez que deba conocer del trámite concursal.

Artículo 221. PROCESOS EJECUTIVOS ALIMENTARIOS EN CURSO.

Durante el trámite concordatario, los procesos ejecutivos alimentarios continuarán su curso y no se suspenderán ni se levantarán las medidas cautelares decretadas y practicadas en ellos. No obstante, si llegaren a desembargarse bienes o quedare un remanente del producto de los embargados o subastados, se pondrán a

disposición del Juez que conoce del trámite concursal.

En la etapa de liquidación estos procesos deberán enviarse al Juez que esté conociendo del trámite liquidatorio, y se incorporarán a éste, en la misma forma que los demás procesos.

Artículo 222. NOMBRAMIENTOS.

El nombramiento de contralor o liquidador se hará de la lista que para dichos efectos elabore la Superintendencia de Sociedades.

Artículo 223. DESAPODERAMIENTO.

Habrá lugar al desapoderamiento del deudor persona natural, en los siguientes eventos:

1. Cuando el deudor se ausente o haya dejado abandonado sus negocios.
2. Cuando con su actuación entorpezca la buena marcha del proceso concursal.

Artículo 224. REHABILITACION DEL DEUDOR.

El deudor será rehabilitado cuando compruebe el cumplimiento del acuerdo pactado dentro de la liquidación, o demuestre que con los bienes que conforman el patrimonio a liquidar, se cubren íntegramente las obligaciones reconocidas en la providencia de calificación y graduación de créditos. Igualmente, habrá lugar a solicitar la rehabilitación, cuando hubieren transcurrido diez años después de haber sido decretada la inhabilidad.

Artículo 225. TRAMITE DEL DESAPODERAMIENTO E INHABILIDAD.

Al desapoderamiento e inhabilidad del deudor persona natural, se le aplicarán en lo pertinente las disposiciones sobre remoción e inhabilidad previstas en el trámite liquidatorio.

Artículo 226. INCUMPLIMIENTO DEL CONCORDATO.

Si no se cumple el concordato, el juez de oficio o a petición de parte, lo declarará terminado mediante incidente, e iniciará el trámite liquidatorio.

Artículo 227. CREDITOS INSOLUTOS.

Concluida la liquidación, los acreedores con saldos insolutos podrán promover contra el deudor persona natural las acciones legales a que haya lugar, para obtener la satisfacción de sus créditos, sobre los bienes que posteriormente adquiera o que figuren a su nombre.

Artículo 228. ALIMENTOS.

Durante la etapa del trámite liquidatorio, el deudor persona natural podrá pedir que le sea fijada una suma mensual, a título de alimentos congruos para atender su subsistencia, y la de las personas a su cargo, la que se tomará de los bienes del patrimonio a liquidar. Si fuere objetada, el juez decidirá previo trámite incidental.

Artículo 229. RECURSO DE APELACION.

Las providencias que profiera el Juez en el trámite del concordato o de la liquidación obligatoria del deudor sólo tendrán recurso de repro-

sición, a excepción de las que adelante se enuncian, contra las cuales procede el recurso de apelación, en el efecto en que respecto de cada una de ellas se indica:

1. La de apertura del trámite, en el efecto devolutivo.
2. La que califique, gradúe créditos y resuelva objeciones, en el devolutivo.
3. La que apruebe la rendición de cuentas del liquidador, en el efecto diferido.
4. La que rechace pruebas, en el efecto devolutivo.
5. La que rechace la solicitud de nulidad, en el efecto devolutivo, y la que la decrete en el efecto suspensivo.
6. La que resuelva el desapoderamiento del deudor o la remoción del liquidador, en el efecto devolutivo.
7. La que decrete o niegue medidas cautelares, en el efecto devolutivo.
8. La que ordene la entrega de bienes, en el efecto suspensivo y la que la niegue, en el devolutivo.
9. La que declare cumplido el concordato, en el efecto suspensivo y la que lo declare incumplido en el devolutivo.

Artículo 230. FUERO DE ATRACCION.

Para los fines previstos en esta ley, todos los procesos que deban adelantarse por causa o razón del trámite del concordato o de la liquidación obligatoria, del deudor persona natural, deberán ser conocidos por el Juez que tramita el concordato o la liquidación. Salvo disposición en contrario, el trámite de estos procesos no afectará el curso del concordato o la liquidación obligatoria.

TITULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 231. FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

De conformidad con lo previsto en el ordinal décimo del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis meses contados a partir de la publicación de la presente ley para que determine la estructura, administración y recursos de la Superintendencia de Sociedades con el fin de que cumpla adecuadamente las funciones que se le fijan en la presente ley.

Artículo 232. APLICACION DE LAS NORMAS SOBRE COMPETENCIA.

En los casos de escisión de sociedades y en todos aquellos que impliquen consolidación o integración de empresas o patrimonios, deberá darse cumplimiento a las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.

Artículo 233. COMPETENCIA RESIDUAL.

Las facultades asignadas en esta ley en materia de, vigilancia y control a la Superintendencia de Sociedades serán ejercidas por la

Superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva sociedad, si dichas facultades le están expresamente asignadas. En caso contrario, le corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, salvo que se trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de Valores.

Artículo 234. CONCILIACION.

En cualquier sociedad la entidad de inspección, vigilancia o control competente, podrá actuar como conciliadora en los conflictos que surjan entre los socios o entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del contrato social.

Para tal fin, el Superintendente mediante auto dispondrá la conciliación y señalará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación de lo cual se notificará personalmente a las partes, acto en el que deberá enterárseles del propósito de la audiencia.

A la audiencia de conciliación deberán concurrir las partes con o sin apoderado. Si la audiencia no se puede llevar a cabo por inasistencia de alguna de ellas o si realizada no se logra acuerdo, se podrá citar a una segunda audiencia para dentro de los diez días siguientes. Logrado algún acuerdo entre las partes, el acta que la contenga, que será firmada por todas ellas y donde debe especificarse con toda claridad las obligaciones a cargo de cada una, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Si no se logra acuerdo alguno, igualmente debe dejarse constancia de ello en el acta mencionada.

Artículo 235. CENTRO DE ARBITRAJE.

La Superintendencia de Sociedades podrá organizar un Centro de Arbitraje para la solución de conflictos que surjan entre los socios o entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o cumplimiento del contrato social. A través de este centro, los particulares actuarán como árbitros en la solución de tales conflictos. Dicho centro deberá contar con un reglamento que contendrá las prescripciones de ley y el cual deberá someterse a la aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Artículo 236. PERITOS.

En los casos en que de acuerdo con esta ley o con el Libro segundo del Código de Comercio, deban designarse peritos, ésta la hará la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio prin-

cipal de la sociedad, las cuales y para tal fin, elaborarán listas integradas por expertos en cada una de las respectivas materias.

Artículo 237. IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE REINTEGRO.

En el evento de despido o remoción de administradores y revisor fiscal no procederá la acción de reintegro consagrada en la legislación laboral.

Artículo 238. REMISION AL PROCESO VERBAL SUMARIO.

Los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario.

Artículo 239. TITULO EJECUTIVO.

Los documentos de oferta de colocación, adquisición o venta de aportes de capital, los de su aceptación o rechazo y los dictámenes de los peritos prestarán mérito ejecutivo para el ejercicio de los derechos u obligaciones que en ellos consten. Tales documentos se presumen auténticos.

Artículo 240. TERMINO DE PRESCRIPCION.

Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el Libro Segundo del Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años, salvo que en ésta se haya señalado expresamente otra cosa.

Artículo 241. NORMAS ESPECIALES.

Lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de las normas tributarias y de las especiales aplicables a las sociedades sometidas a la inspección, vigilancia o control de entidades distintas a la Superintendencia de Sociedades; así mismo se aplicará sin perjuicio de las normas que regulan el mercado público de valores.

Artículo 242. VIGENCIA.

Esta ley empezará a regir al vencimiento de los seis meses contados a partir de su promulgación.

Los concordatos y las quiebras iniciadas antes de la entrada en vigencia de esta ley, seguirán rigiéndose por las normas aplicables al

momento de entrar a regir esta ley. No obstante, esta ley se aplicará inmediatamente entre en vigencia, en los siguientes casos:

1. Cuando fracase o se incumpla el concordato, en cuyo evento, en vez de la quiebra se adelantará la liquidación obligatoria.

2. En lo relacionado con el decreto, práctica y levantamiento de las medidas cautelares consagrados en esta ley.

Artículo 243. INCORPORACION

Facúltase al Gobierno Nacional para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley, proceda a incorporar su contenido por materias en el Código de Comercio. Para tal efecto podrá disponer la reenumeración del mismo.

Artículo 244. SEGUIMIENTO

La Dirección General de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo del Ministerio de Justicia y del Derecho, hará el seguimiento de los efectos producidos por la aplicación de la presente ley. Dicha Dirección rendirá un informe sobre los efectos de la misma dentro de los 18 meses siguientes a dicha vigencia, ante las Presidencias del Senado y la Cámara de Representantes.

Artículo 245. NORMAS DEROGADAS.

Esta ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Capítulo I del Título II del Libro Segundo, el Título II del Libro Sexto y los artículos 121, 152, 292, 428, 439, 443 y 448 del Código de Comercio; los artículos 2079 a 2141 del Código Civil; el Decreto 350 de 1989; el Título 28 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 4º, 5º y 6º del Decreto 2155 de 1992.

CAMARA DE REPRESENTANTES

COMISION TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SECRETARIA GENERAL

Santafé de Bogotá, D. C., abril 21 de 1995

En la fecha fue recibida en esta Secretaría la ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 119/93 y 163/93 Cámara (acumulados) "por la cual se modifica el Código de Comercio, se expide un nuevo Régimen de Procesos Concursales y se dictan otras disposiciones.

El Secretario General,

Herman Ramírez Rosales.